


CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA//DTE: GLADIS LONDOÑO - DDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA. Y OTROS//RADICADO: 2021-00073//MFJ

Notificaciones GHA <notificaciones@gha.com.co>

Mar 30/05/2023 3:52 PM

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Tuluá <j01cctulua@cendoj.ramajudicial.gov.co>;jml <jml@asesoriaslamar.com>;Diana Isabel Gonzalez <alvaroesp23@gmail.com>;jorge.humberto.mayorga@deoccidente.net <jorge.humberto.mayorga@deoccidente.net>

CC: informes <informes@gha.com.co>;Maria Fernanda Jimenez Piarpusan <mjimenez@gha.com.co>;Darlyn Marcela Muñoz Nieves <dmunoz@gha.com.co>;Ana María Barón Mendoza <abaron@gha.com.co>

 2 archivos adjuntos (11 MB)

CONTE DDA Y LLA. GLADIS LONDOÑO - SBS.pdf; ANEXOS CONT. DDA. SBS.pdf;

Señores:

JUZGADO PRIMERO (1º) CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUÁ - VALLE
E.S.D.

PROCESO:	VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DEMANDANTE:	GLADIS LONDOÑO HERRERA
DEMANDADOS:	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de generales de ley ya conocidos por el Despacho, obrando en calidad de Apoderado de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** conforme obra en el expediente, encontrándome dentro del término legal, a través de este acto respetuosamente procedo en primer lugar, **CONTESTARLA DEMANDA** Verbal de Responsabilidad Civil, incoada por la señora **GLADIS LONDOÑO HERRERA**, en contra de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. y OTRO**; y en segundo lugar **CONTESTAR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA** formulados por la **COOPERATIVA TRANSPORTES DE OCCIDENTE LTDA** y el señor **GUILLERMO ANDRÉS GÓMEZ LÓPEZ**, a mi representada. Para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen en el presente escrito.

Por favor confirmar el recibido

Cordialmente,

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá
T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.

Señores

JUZGADO PRIMERO (1º) CIVIL DEL CIRCUITO DE TULUÁ - VALLE

E.S.D.

PROCESO: VERBAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL
DEMANDANTE: GLADIS LONDOÑO HERRERA
DEMANDADOS: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA Y OTRO.
RADICACIÓN: 76-834-3103-001-2021-00073-00

ASUNTO: CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, de generales de ley ya conocidos por el Despacho, obrando en calidad de Apoderado de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** conforme obra en el expediente, encontrándome dentro del término legal, a través de este acto respetuosamente procedo en primer lugar, **CONTESTAR LA DEMANDA** Verbal de Responsabilidad Civil, incoada por la señora **GLADIS LONDOÑO HERRERA**, en contra de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. y OTRO**; y en segundo lugar **CONTESTAR LOS LLAMAMIENTOS EN GARANTÍA** formulados por la **COOPERATIVA TRANSPORTES DE OCCIDENTE LTDA** y el señor **GUILLERMO ANDRÉS GÓMEZ LÓPEZ**, a mi representada. Para que en el momento en que se vaya a definir el litigio se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen en el presente escrito, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, de conformidad con lo que se consigna a continuación:

CAPÍTULO I

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA “RELATIVOS AL ACCIDENTE DE TRÁNSITO”

Frente al hecho “1”: a mi representada no le consta de manera directa que el día 15 de enero de 2020 hubiese ocurrido un accidente de tránsito entre el vehículo SOZ-881, conducido por el señor Jhon Fredy León Blandón, y la señora Gladis Londoño Herrera, en calidad de presunta pasajera del citado automotor. Es menester considerar que en el expediente adolece de pruebas que permita acreditar de manera fehaciente la ocurrencia del mentado accidente de tránsito ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que supuestamente ocurrió, y junto con ello, no se acredita por la

actora, el presunto contrato de transporte que le otorgaría la calidad de pasajera. Se precisa que los elementos probatorio adjuntos al expediente, no se relaciona el vehículo de placa SOZ-881, sino al distinguido con la placa **SOZ-882**. En ese orden de ideas, se considera necesario que la parte actora pruebe lo expuesto.

Frente al hecho “2”: Pese que a mi representada no le consta de manera directa que para la época de los hechos (15 de enero del 2020) el señor Guillermo Andrés Gómez López ostentara la calidad de propietario del vehículo SOZ-882, lo cierto es que dentro del expediente obra copia del documento denominado Histórico Propietarios, expedido el 26 de enero de 2021 por el Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT, y adjunto al escrito demandatorio, a partir del cual se desprende que en efecto el nombrado es propietario del referido automotor desde el 22 de agosto de 2018.

Frente al hecho No. “3”: Frente a las manifestaciones de este hecho, procedo a pronunciarme así:

- Es cierto en cuanto a que mi representada expidió la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098, vigente entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, que ampara la responsabilidad civil contractual derivada de la conducción del vehículo de placa SOZ-882. Sin embargo, ello no significa *per se* que exista de manera automática una obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora, pues esta solo surge cuando el riesgo amparado en el mentado contrato ha sido efectivamente realizado en los términos de su cobertura, y no se configure ninguna causal legal o convencional de exclusión o de inoperancia del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, se resalta que mi procurada expidió además la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual número 1000100, vigente entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, que opera en exceso de la cobertura primaria pactada en la póliza número 1000098.

Se aclara que, dado que los contratos de seguro anteriormente identificados amparan la totalidad del parque automotor, la disponibilidad de las sumas aseguradas dependerá de los pagos que se hubieren efectuado con cargo a dichas coberturas primarias y/o en exceso.

En todo caso, si en gracia de discusión llegara a proferirse un fallo adverso a los intereses de mi representada, el alcance de su obligación deberá estar sujeto estrictamente al contenido literal de las condiciones generales y particulares concertadas mediante las pólizas en referencia.

- Finalmente, respecto a la presunta filiación del vehículo SOZ882 a la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., se resalta que no le consta a mi representada y en todo

caso, dentro del expediente no obra prueba enderezada a acreditar dicha filiación, como fuera el certificado de tradición del mentado vehículo.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA “RELATIVOS A LOS PERJUICIOS OCASIONADO”

Frente al hecho “4”: el presente hecho expone varios argumentos, ante los cuales me pronunciare de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta de manera directa que la señora Gladis Londoño Herrera hubiere sufrido lesiones corporales, como consecuencia del supuesto accidente de tránsito referido en el escrito demandatorio. Sin embargo, debe resaltarse al despacho que **(i)** dentro de los anexos del expediente no obra prueba encaminada a demostrar la supuesta ocurrencia del mentado accidente de tránsito, ni las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que aconteció, y **(ii)** tampoco se encuentra probado que la señora Londoño Herrera se desplazara en el vehículo SOZ-882, por ser supuestamente pasajera del mismo.
- Sin perjuicio de lo anterior, se resalta que, según los anexos del dossier, las presuntas lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera fueron transitorias. En efecto, según el Informe Pericial de Clínica Forense elaborado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de fecha 15 de diciembre de 2020, la señora Gladis Londoño Herrera sufrió perturbación funcional de carácter transitorio:

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA CINCUENTA (50) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio;

Además, según la historia clínica adjunta a la demanda, la hoy demandante no reportó alteraciones articulares, tal como consta en distintas anotaciones, así:

MUÑECA:
Relaciones articulares conservadas.
Fractura de Colles de la metáfisis distal del radio mantenida con elemento de osteosíntesis y ligera abursión de la apófisis estiloides anotándose el eje y estado de consolidación de ellas.
En el tercio distal de la diáfisis del cubito hay irregularidad de la cortical con aspecto traumático.
En las tomas efectuadas no se aprecian imágenes neoplásicas, osteolíticas ni osteoblásticas.
Mineralización ósea conservada, acorde con la edad.
Partes blandas conservadas.

ANTEBRAZO DERECHO AP Y LATERAL

Densidad ósea conservada

Relaciones articulares sin alteraciones.

No se observan lesiones líticas ni blásticas.

Trazo de fractura a nivel del extremo distal del radio, con la presencia de material de osteosíntesis, a correlacionar con antecedentes del paciente

Tejidos blandos de apariencia normal.

Frente al hecho “5”: Es parcialmente cierto y aclaro: si bien a mi representada no le consta de manera directa lo referido frente al trámite de valoración de la señora Gladis Londoño Herrera realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo cierto es que dentro de los anexos del del expediente obra copia de un Informe Pericial de Clínica Forense emitido por el nombrado Instituto, **de fecha 15 de diciembre de 2020** (y no de fecha 02 de junio de 2020 como se indicó en este hecho), conforme al cual se concluye que la señora Londoño Herrera sufrió perturbación funcional **de carácter transitorio**:

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA CINCUENTA (50) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio;

Por lo anterior, se destaca que no es cierto, según el material probatorio que obra en el expediente, que a la hoy demandante se le hubiese otorgado una incapacidad médico legal definitiva de 150 días ni que padeciera perturbación funcional de miembro superior izquierdo de carácter permanente. De hecho, las presuntas lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera **ocurrieron en su extremidad superior derecha.**

Frente al hecho “6”: No es cierto en la forma en que está expuesto y aclaro:

De conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las entidades que pueden calificar una Pérdida de Capacidad Laboral corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en primera instancia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda. No obstante, esta disposición normativa fue modificada por el artículo 142 del decreto 019 de 2012, cuyo tenor literal, en lo pertinente, es el siguiente:

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad

*laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las **Juntas Regionales de Calificación de Invalidez** del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, la cual decidirá en un término de cinco (5) días. (Énfasis propio).*

De este modo, es claro que dicha calificación no es una facultad que pueda asumir un particular, en tanto la ley de manera expresa ha manifestado quiénes son los determinados para calificar la pérdida de capacidad laboral de una persona.

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el supuesto dictamen referido en este hecho no fue elaborado por ninguna de las instituciones anteriormente nombradas, sino por el médico Juan Manuel Hincapié Medina, razón por la cual el documento arrimado al expediente no puede surtir los efectos probatorios que pretende y tampoco, en consecuencia, hay lugar al reconocimiento de los perjuicios pretendidos con base en él. De modo que, solicito su acreditación fáctica en virtud del principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

Frente al hecho “7”: No le constan a mi representada las manifestaciones expuestas por la activa, comoquiera que corresponden a aspectos de la esfera íntima de la propia demandante. No obstante, se destaca que en el presente caso no puede nacer obligación indemnizatoria a cargo de la pasiva, por el supuesto perjuicio moral, dado que **(i)** dentro de los anexos del escrito demandatorio no obra prueba encaminada a demostrar la supuesta ocurrencia del mentado accidente de tránsito, ni las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que aconteció, y **(ii)** tampoco se encuentra probado que la señora Londoño Herrera se desplazara en el vehículo de placa SOZ-882, por ser supuestamente pasajera del mismo. De este modo, no existe un hecho generador de un daño atribuible a la pasiva ni una relación de causalidad entre ello y la conducta supuestamente desplegada por los demandados. De modo que, solicito su acreditación fáctica en virtud del principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

Frente al hecho No. “8”: No le constan a mi representada las manifestaciones hecho, comoquiera que corresponden a aspectos de la esfera íntima de la propia demandante. No obstante, se destaca que en el presente caso no puede nacer obligación indemnizatoria a cargo de la pasiva, por el supuesto perjuicio moral, dado que **(i)** dentro de los anexos del escrito demandatorio no obra prueba encaminada a demostrar la supuesta ocurrencia del mentado accidente de tránsito, ni las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que aconteció, y **(ii)** tampoco se encuentra probado que la señora Londoño Herrera se desplazara en el vehículo SOZ-882, por ser supuestamente pasajera del mismo. De este modo, no existe un hecho generador de un daño atribuible a la pasiva ni una relación de causalidad entre ello y la conducta supuestamente desplegada por los demandados.

En todo caso, cabe destacar que no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. En efecto, no existe ninguna presunción que opere en favor de la parte actora, que permita emitir una condena por la sola enunciación de un aparente perjuicio. Siendo las cosas de este modo, no existe material probatorio que permita a la demandante acceder al reconocimiento del mentado perjuicio, dado que es inexistente, por lo que cualquier conclusión que se pretenda desprender de dicha transcripción deberá ser acreditada de conformidad a los dispuesto en el Art. 167 del C.G.P.

Frente al hecho “9”: No le consta a mi representada que la señora Gladis Londoño Herrera desempeñara labores lucrativas independientes como estilista, no obstante, se resalta que dentro del expediente no obran pruebas enderezadas a acreditar lo manifestado por la parte actora, de modo que corresponde a ese extremo del litigio demostrar su dicho a través de medios probatorios idóneos, conforme al Art. 167 del C.G.P.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar que una vez consultado el Registro Único de Afiliados – RUAF, se observa que la señora Londoño Herrera se encuentra actualmente afiliada al régimen de salud en calidad de *beneficiaria* y no de cotizante, tal como debiera ser si efectivamente realizara las presuntas actividades lucrativas referidas, conforme a los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud:

INFORMACIÓN BÁSICA					Fecha de Corte:	2023-05-12
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo	
CC 42091442	GLADIS		LONDOÑO	HERRERA	F	
AFILIACIÓN A SALUD					Fecha de Corte:	2023-05-12
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio	
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	19/11/2019	Activo	BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C.	

De lo anterior se puede evidenciar que la señora Gladis Londoño Herrera, desde el año 2019 se encuentra vincula al sistema de salud en calidad de *beneficiario*, infiriendo de esa manera, que mucho tiempo antes de la ocurrencia de los hechos objeto del presente litigio (15 de enero 2020), la hoy demandante no ostentaba una relación laboral vigente, considerando que bajo la obligatoriedad otorgada por la normal laboral, todas las personas que presente un vinculo laboral vigente, deben cotizar al sistema de seguridad social de manera obligatoria. Situación misma que, no se evidencia en el caso de la señora Gladis Londoño Herrera.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA “NEXO CAUSAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL”

Frente al hecho “10”: frente a las manifestaciones de este hecho procedo a pronunciarme así:

- Pese a que a mi representada no le consta de manera directa lo manifestado frente a la supuesta calidad de pasajera de la señora Gladis Londoño Herrera, del vehículo distinguido con placa SOZ-882, el día 15 de enero de 2020, se destaca que dentro del plenario NO obra prueba encaminada a acreditar dicha condición, ni las supuestas condiciones en las que se concertó el aludido contrato de transporte.
- Tampoco se encuentra probado al interior del proceso, que efectivamente ocurriera el mentado accidente de tránsito ni mucho menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que supuestamente aconteció el mismo, a partir de las cuales se deduzca que, de haber ocurrido, resulta imputable al extremo pasivo del litigio.
- Finalmente, cabe destacar que la expresión “*siniestro*” empleada en este hecho, resulta indebida e inapropiada, comoquiera que de conformidad con el artículo 1072 del Código de Comercio “*se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado*”. En el presente caso, tal como se ha indicado, no existe material probatorio suficiente para acreditar de manera fehaciente la supuesta responsabilidad de la parte pasiva, por la presunta ocurrencia de un accidente respecto al cual **(i)** NO obra prueba de haber acontecido y **(ii)** tampoco se demuestra que la hoy demandante concertara un contrato de transporte con el vehículo SOZ882, aparentemente involucrado en el mentado accidente, y que en virtud del mismo, ostentara la calidad de pasajera para la época en que tuvieron lugar los hechos objeto de litigio.

Frente al hecho “11”: pese a que a mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que no intervino ni directa ni indirectamente en los sucesos reseñados, se destaca que, conforme al material probatorio adjunto al escrito demandatorio, NO es cierto que la sociedad demandada incurriera en incumplimiento por el supuesto contrato de transporte aducido por la hoy demandante.

En efecto, no es posible predicar el supuesto incumplimiento contractual de una parte, cuando el referido contrato no se encuentra probado en el presente litigio. Por lo mismo, tampoco resulta posible concluir que la señora Gladis Londoño Herrera deriva algún derecho del presunto negocio jurídico en cuestión. Pero además de lo anterior, no puede perderse de vista que dentro del proceso tampoco existe prueba idónea encaminada a demostrar de manera fehaciente las supuestas condiciones de tiempo, modo y lugar del mentado accidente, con fundamento en las cuales el extremo pasivo del litigio resulta responsable y consecuentemente, obligado a resarcir a la demandante, por los hechos aducidos en el escrito demandatorio.

Finalmente, se destaca que si bien a mi representada no le consta de manera directa lo manifestado frente a la supuesta lesión sufrida por la señora Gladis Londoño Herrera, lo cierto es que dentro de

los anexos del expediente obra copia de un Informe Pericial de Clínica Forense emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de fecha 15 de diciembre de 2020, conforme al cual se concluye que la señora Londoño Herrera sufrió perturbación funcional **de carácter transitorio**:

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Mecanismo traumático de lesión: Contundente. Incapacidad médico legal DEFINITIVA CINCUENTA (50) DÍAS. SECUELAS MÉDICO LEGALES: Perturbación funcional de miembro superior derecho de carácter transitorio;

De lo anterior se puede concluir que la parte activa del presente asunto, no ha probado lo referido en el presente hecho. De modo que, solicito su acreditación fáctica en virtud del principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Frente a la pretensión “1”: ME OPONGO a la declaratoria de responsabilidad civil contractual del extremo pasivo, por la presunta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020, comoquiera que dentro del plenario no se encuentran acreditados los presupuestos necesarios para estructurar la pretendida responsabilidad. En efecto resulta necesario reiterar al despacho que: **(i)** Entre los anexos del escrito demandatorio, no obra prueba alguna que dé cuenta del supuesto contrato de transporte suscrito entre la señora Gladis Londoño Herrera y la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., en virtud del cual la nombrada se desplazaría en calidad de pasajera del automotor SOZ-882, afiliado a la citada sociedad; **(ii)** Además de lo anterior, o sea, de no acreditarse la supuesta condición de pasajera, dentro del plenario tampoco se encuentra probada la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020 ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se desarrolló, como fuera el Informe Policial de Accidente de Tránsito, diligenciado por la respectiva autoridad de tránsito competente para el fin.

Ahora, respecto a mi representada, se resalta que si bien expidió la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098, vigente entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, que ampara la responsabilidad civil contractual derivada de la conducción del vehículo SOZ-882, ello no significa *per se* que exista de manera automática una obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora, pues esta solo surge cuando el riesgo amparado en el mentado contrato ha sido efectivamente realizado en los términos de su cobertura, y no se configure ninguna causal legal o convencional de exclusión o de inoperancia del mismo. En concordancia con lo anterior, a los efectos del referido contrato de seguro, se entiende por *pasajero*, conforme a lo pactado en sus condiciones generales. Bajo tales presupuestos, se reitera que el

supuesto contrato de transporte aducido por la demandante no se encuentra probado dentro del proceso y por lo mismo, tampoco resulta acreditada su alegada condición de pasajera del vehículo SOZ-882. Consecuentemente, y al no existir responsabilidad civil de los demás demandados, tampoco nace la obligación indemnizatoria de mi representada, conforme a las estipulaciones concertadas en la póliza en cuestión.

Sin perjuicio de lo anterior, se resalta que mi procurada expidió además la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000100, vigente entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, que opera en exceso de la cobertura primaria pactada en la póliza No. 1000098. Se aclara en todo caso que, dado que los contratos de seguro anteriormente identificados amparan la totalidad del parque automotor, la disponibilidad de las sumas aseguradas dependerá de los pagos que se hubieren efectuado con cargo a dichas coberturas primarias y/o en exceso.

Frente a la pretensión “2”: **ME OPONGO** a esta pretensión condenatoria en atención a que es consecuencia de la anterior, se condene a la parte pasiva al reconocimiento y pago de los supuestos perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales reclamados por la demandante, por la presunta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020, frente a los cuales procedo a pronunciarme puntualmente así:

Daño patrimonial: **ME OPONGO** rotundamente al reconocimiento y pago de la suma de \$24.606.613, por concepto de lucro cesante, consolidado y futuro, comoquiera que no concurren los presupuestos necesarios para acceder al mentado perjuicio. En efecto, de entrada, se destaca que al interior del proceso no se encuentra probado que la señora Gladis Londoño Herrera ejerciera alguna actividad lucrativa ni mucho menos el monto de los ingresos que supuestamente percibía por tal labor. De hecho, se resalta que una vez consultado el Registro Único de Afiliados – RUAF, se observa que la señora Londoño Herrera se encuentra actualmente afiliada al régimen de salud en calidad de *beneficiaria* y no de cotizante, tal como debiera ser si efectivamente realizara las presuntas actividades lucrativas referidas, conforme a los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tal circunstancia lleva a concluir que efectivamente la hoy demandante no percibe ningún tipo de ingreso mensual. Además, la señora Gladis Londoño Herrera no ha sido calificada con pérdida en la capacidad laboral y por lo mismo, no es acreedora de dicha modalidad de perjuicio. En efecto, el dictamen arrojado al expediente con el que pretende acreditarse dicha pérdida, no puede surtir los efectos probatorios que persigue, comoquiera que el mismo fue suscrito por el médico Juan Manuel Hincapié Medina, quien no se encuentra facultado legalmente para emitir dicho dictamen, habida cuenta que de conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las entidades que pueden calificar una Pérdida de Capacidad Laboral corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en primera instancia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda. De este modo, es claro que dicha calificación no es una

facultad que pueda asumir un particular, en tanto la ley de manera expresa ha manifestado quiénes son los determinados para calificar la pérdida de capacidad laboral de una persona.

- **Daño moral: ME OPONGO** de manera rotunda al reconocimiento y pago de la suma de \$60.000.000 por concepto de perjuicio moral, primero, porque no se estructura responsabilidad civil en cabeza de la parte pasiva y, por tanto, no surge su obligación indemnizatoria, y segundo, porque en todo caso, la suma pretendida resulta abiertamente desproporcionada y contraría los parámetros jurisprudenciales establecidos para el fin. No puede perderse de vista que, tratándose de perjuicios morales ocasionados por lesiones transitorias, la H. Corte Suprema de Justicia¹ ha estimado que la suma de 20 SMLMV, resulta apropiada para consecuencias temporales. Pero en todo caso, en este proceso no es posible acceder a tal suma, sin estar probada la responsabilidad del extremo pasivo y sin estar acreditada la gravedad o levedad de la lesión que haga viable y justificable el monto referido.
- **Daño a la vida de relación o daño a la salud: ME OPONGO** al reconocimiento y pago de la suma de \$60.000.000, por concepto de daño a la vida de relación, primero porque no se estructuró responsabilidad civil en cabeza de la pasiva y por lo mismo, no existe obligación indemnizatoria a su cargo, y segundo, porque en todo caso, no se acreditaron los presupuestos necesarios para acceder al mismo. Además, la suma pretendida resulta abiertamente desproporcionada, y contraría los parámetros establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia. En efecto, la mentada Corporación en Sentencia SC2107-2018², resolvió el daño a la vida de relación en la suma equivalente a 25 SMLMV, con ocasión a un accidente **donde al actor le fue amputada la pierna derecha, es decir, un caso que comporta una gravedad sustancialmente mayor a la discutida en este proceso.** Con todo, no resulta aceptable que en el hecho que motivó la controversia y que resulta mucho menos gravoso para el demandante, se tase en una suma excesiva y desbordada.

Frente a la pretensión “3”: ME OPONGO a esta pretensión condenatoria en atención a que es consecuencia de las anteriores, se condene a mi representada al pago de intereses moratorios en virtud de los cuales es inexistente la obligación indemnizatoria de mi representada, me opongo al reconocimiento y pago de intereses moratorios, comoquiera que no existe condena en su contra susceptible de causar tales reconocimientos. En el caso que nos ocupa, no ha podido ser demostrado la realización del riesgo asegurado, y mucho menos la responsabilidad de la pasiva por la presunta ocurrencia de los hechos del 15 de enero del 2020, donde la hoy demandante manifiesta haber sufrido afectación por la supuesta ocurrencia de un accidente de tránsito, en el cual se vio involucrado el vehículo de placa SOZ-882, donde la señora Gladis Londoño Herrera se transportaba

¹ Corte Suprema de Justicia, Sala Cas. Civ. Sentencia SC5340 de 2018.

² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, radicación número 11001-31-03-032-2011-00736-01, de 12 de junio de 2018. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

en la presunta calidad de pasajera, situación misma que tampoco ha sido acreditada por la hoy demandante.

Frente a la pretensión “4”: ME OPONGO a que se condene en costas y agencias en derecho a la parte pasiva del litigio, habida cuenta de la inexistencia de responsabilidad de los demandados y consecuentemente, de su obligación indemnizatoria. De modo que, teniendo que despacharse desfavorablemente las pretensiones del extremo actor, tampoco puede haber lugar a una condena por este concepto.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del Art. 206 del CGP³ y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el Juramento Estimatorio de la Demanda. Lo mencionado, toda vez que se evidencia la ausencia de pruebas que permitan inferir la viabilidad del reconocimiento de las sumas que se indican en dicho acápite.

De acuerdo con el Art. 206 del CGP, la parte demandante deberá indicar en el texto en el cual se hace el juramento estimatorio lo siguiente: 1. Que se afirma bajo la gravedad del juramento; 2. Que se trata de juramento estimatorio; 3. El valor de cada uno de los conceptos, rubros o partidas que componen la indemnización, frutos, mejoras o compensación, en este tipo de escenarios, incluir los conceptos por perjuicios materiales; 4. El valor total y; 5. Las razones que se tuvo en cuenta para cada uno de los valores asignados, exponiéndolos con precisión, claridad y con fundamento en pruebas.

En el caso que nos convoca, la accionante incumple con el quinto requisito puesto que, las pretensiones de la demanda se sustentan todas en la supuesta responsabilidad del conductor del vehículo de placas SOZ-882 de la causa del accidente de tránsito supuestamente ocurrido el día 15 de enero de 2020. Sin embargo y como con amplitud se ha demostrado en la contestación de esta demanda, no existe prueba alguna sobre la cual se demuestre que en su cargo y, por consiguiente, al de mi representada, se pueda estructurar la existencia de responsabilidad civil contractual, con motivo de la cual pueda despacharse favorablemente las pretensiones de la demanda. En efecto resulta necesario reiterar al despacho que:

³ CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, Artículo 206: “(...) Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación (...)”.

- i. Entre los anexos del escrito demandatorio, no obra prueba alguna que dé cuenta del supuesto contrato de transporte suscrito entre la señora Gladis Londoño Herrera y la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., en virtud del cual la nombrada se desplazaría en calidad de pasajera del automotor SOZ-882, afiliado a la citada sociedad.
- ii. Además de lo anterior, o sea, de no acreditarse la supuesta condición de pasajera, dentro del plenario tampoco se encuentra probada la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020 ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se desarrolló, como fuera el Informe Policial de Accidente de Tránsito, diligenciado por la respectiva autoridad de tránsito competente para el fin.

En ese sentido, no puede prosperar la estimación de perjuicios, dado que ante la ausencia de la responsabilidad de resarcir los mismos, está llamada a fracasar cualquier acción en que se pretenda una indemnización. Si bien expone las razones por las cuales presuntamente se le causaron unos perjuicios materiales a título daño lucro cesante, sus aseveraciones no fueron respaldadas con medios de prueba suficientes. En efecto, se solicitó por la suma de **\$1.813.416 por lucro cesante consolidado**, y la suma de **\$22.793.197 por lucro cesante futuro**, que según aduce la accionante se derivan del accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero del 2020. No obstante, en el remoto e improbable caso en que se profiera un fallo adverso a esta parte, resulta necesario manifestar al despacho que la suma reclamada debe, necesariamente ajustarse al valor real del presunto perjuicio y a lo debidamente probado en el curso del proceso. En ese sentido, vale la pena anotar que no existe certeza sobre las circunstancias que presuntamente rodean la vida laboral de la señora Gladis Londoño Herrera, como tampoco la hay acerca de los supuestos ingresos que percibe.

En efecto, una vez consultado el Registro Único de Afiliados – RUAF, se observa que la señora Londoño Herrera se encuentra actualmente afiliada al régimen de salud en calidad de *beneficiaria* y no de cotizante, tal como debiera ser si efectivamente realizara las presuntas actividades lucrativas referidas, conforme a los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tal circunstancia lleva a concluir que efectivamente la hoy demandante no percibe ningún tipo de ingreso mensual.

No puede perderse de vista que, de manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia ha manifestado que uno de los presupuestos necesarios para reconocer el lucro cesante, radica en la certeza de la causación del detrimento que se alega. Para ello, resulta indispensable que la parte actora acredite que efectivamente se encontraba en condiciones de recibir unos ingresos ciertamente determinados y que la imposibilidad de percibirlos obedece exclusivamente a la causación del daño. Por esta razón, se descartan todos los pedimentos que se basan en meros planteamientos hipotéticos.

En el presente caso, como primera medida, la parte actora no demuestra siquiera la realización de una actividad lucrativa, de modo que no existe certeza de los ingresos que presuntamente podría haber recibido la nombrada. Pero además, no existe ningún impedimento (mucho menos uno atribuible a la parte pasiva) que indique que el actor disminuyó su capacidad lucrativa o que se encuentra en imposibilidad absoluta de ejercerla, como sería efectivamente una pérdida en la capacidad laboral, que desde luego, no se presentó, comoquiera que el “Dictamen” arrimado por el extremo actor no fue expedido por la autoridad competente, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y por tanto, no surte los efectos probatorios que se pretenden. Pues como ya se explicó, de conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las entidades que pueden calificar una Pérdida de Capacidad Laboral corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en primera instancia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda. No obstante, esta disposición normativa fue modificada por el artículo 142 del decreto 019 de 2012.

De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que es evidente que, con las peticiones indemnizatorias por concepto de lucro cesante, indiscutiblemente la actora desea lucrarse, pues la configuración de los presupuestos para el reconocimiento de dichos conceptos no está acreditada en el plenario. Con todo, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, solicito respetuosamente ordenar la regulación de la cuantía y dar aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del Art. 206 del CGP.

IV. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos (2) grupos. En primer lugar, se abordarán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión a los hechos del 15 de enero del 2020, luego los relativos a los perjuicios invocados, y finalmente se formularán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA INEXISTENTE RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO

1. AUSENCIA DE MEDIOS PROBATORIOS QUE PERMITAN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD QUE SE PRETENDE ATRIBUIR A LA PARTE DEMANDADA

De conformidad con la plataforma fáctica invocada en el escrito demandatorio, el extremo actor pretende la declaratoria de responsabilidad civil contractual de los demandados, con fundamento en el artículo 1003 del Código de Comercio, por el supuesto incumplimiento del presunto contrato

de transporte concertado entre la señora Gladis Londoño Herrera y la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., con ocasión al cual la nombrada se desplazaría en calidad de pasajera del automotor distinguido con placa SOZ-882. No obstante, no concurre ninguno de los elementos configurativos de dicha responsabilidad, comoquiera que: **(i)** entre los anexos del escrito demandatorio, no obra prueba alguna que dé cuenta del supuesto contrato de transporte suscrito entre la señora Gladis Londoño Herrera y la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., en virtud del cual la nombrada se desplazaría en calidad de pasajera del automotor SOZ882, afiliado a la citada sociedad y; **(ii)** Además de lo anterior, o sea, de no acreditarse la supuesta condición de pasajera, dentro del plenario tampoco se encuentra probada la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020 ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se desarrolló, como fuera el Informe Policial de Accidente de Tránsito, diligenciado por la respectiva autoridad de tránsito competente para el fin.

Sobre el particular, resulta necesario traer a consideración la postura de la H. Corte Suprema de Justicia sobre la importancia de acreditar en debida forma la ocurrencia del accidente de tránsito, y frente a ello ha establecido lo siguiente:

*Era indispensable, en consecuencia, escrutar, a través del acervo probatorio practicado y recaudado, **(i) la descripción del lugar de la colisión** (vgr. la anchura o uniformidad de la vía, topografía y señales de tránsito del sector circundante antes y después del punto de colisión, el estado del tramo vial); **(ii) los factores de importancia en el iter del choque** (hora, condiciones atmosféricas, características del flujo vial al momento del impacto, campo de visibilidad, la ubicación de los vehículos luego del suceso, así como su examen mecánico, entre ellos, las señales acústicas y luminosas, las condiciones de los neumáticos, huellas de frenado, detritus de vidrios, fango o barniz desprendidos de los automotores por efectos de la colisión); **(iii) los aspectos atinentes al comportamiento de los involucrados** (averiguado mediante las versiones de éstos o mediante testigos presenciales del hecho); y **(iv) las conclusiones sobre las comprobaciones fácticas acerca de las razones que provocaron el accidente.**⁴ (Negrita fuera del texto original)*

Por consiguiente, el reclamante en acción contractual deberá enlazar su causa y labor demostrativa a “(...) *aducir la prueba de los factores constitutivos de responsabilidad (...), como son, el perjuicio, la culpa y la relación de causalidad o dependencia que lógicamente debe existir entre los dos primeros elementos enunciados, estando desde luego el demandado en posibilidad de exonerarse de la obligación de que se trata si demuestra un hecho exonerativo de responsabilidad (...)*” (CSJ SC del 9 de feb. de 1976).

En ese orden de ideas, los mandatos legales y jurisprudenciales para que se configure responsabilidad alguna es necesario que concurren tres elementos: (i) el perjuicio padecido, (ii) el

⁴ CSJ, Cas. Civil, Sent. Radicación 73001-31-03-001-2014-00034-01, sep. 20/2019, M.P. Luis Armando Tolosa Villabona

hecho intencional o culposo atribuible al demandado y (iii) la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre estos factores. El concepto de los tres elementos ha sido precisado por la doctrina de la siguiente manera:

*“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren **tres elementos absolutamente** indispensables y necesarios: **el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad** que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador.*

***El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado.** La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad”⁵ (Negrilla fuera del texto original).*

Con relación al nexo causal, es importante tener en cuenta que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones sine qua non, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado.

Dicho de otras palabras, dentro del proceso que nos ocupa no se encuentra probado **(i)** la existencia de un contrato de transporte legalmente concertado entre la señora Gladis Londoño Herrera y la sociedad demandada; **(ii)** la ocurrencia del supuesto accidente de tránsito de fecha 15 de enero de 2020, que dio origen al litigio, ni **(iii)** la relación de causalidad necesaria entre la conducta que se pretende atribuir a la pasiva y los perjuicios presuntamente sufridos por la actora. Lo anterior no encamina a exponer que no hay una demostración efectiva de la presunta responsabilidad que se pretende endilgar, y lo expuesto por la parte activa son señalamientos infundados, por cuanto no hay siquiera un Informe Policial de Accidentes de tránsito allegado al expediente, documento encaminado a consignar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los diferentes accidentes de tránsito que se presenten, dando de esta manera una idea inicial sobre el posible origen de los hechos que rodean el accidente tránsito, adicionalmente, de consignar cuales son las personas involucradas, responsables, víctimas y la hipótesis del presunto suceso.

⁵ Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008

Como se dijo previamente, los elementos indispensables para declarar la existencia de responsabilidad civil es la acreditación de la ocurrencia de hecho dañoso, la conducta dolosa o gravemente culposa del demandado y el nexo de causalidad. Estos elementos deben demostrarse de forma clara y fehaciente, pues es la base sobre la cual se cimienta la obligación indemnizatoria. En materia de accidentes de tránsito debe decirse que, si bien el Informe Policial de Accidente de Tránsito da cuenta de las circunstancias de tiempo y lugar que rodearon el suceso, de los vehículos y sujetos involucrados, **no corresponde a un dictamen técnico o pericial de responsabilidad**, pues, debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera **hipótesis** (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”), realizada por un agente de tránsito.

En este punto, es preciso resaltar que el Art. 144 inciso primero de la Ley 769 de 2002 o Código Nacional de Tránsito, establece que el informe policial de accidente de tránsito es un **informe descriptivo**, el cual debe contener, entre otros, el estado de la vía, la huella de frenado, el grado de visibilidad, la colocación de los vehículos y la distancia, así como otros elementos que constarán en el croquis. En cuanto a la forma en que se debe diligenciar dicho informe, aquella fue regulada por la Resolución 11268 de 2012, expedida por el Ministerio de transporte, que contiene específicamente el manual de diligenciamiento de este documento. En ese sentido, tenemos que el Informe Policial de Accidentes de Tránsito no se puede clasificar como un informe pericial que pueda determinar la responsabilidad de alguno de los involucrados y el mismo se debe evaluar conforme a lo establecido por la resolución antes mencionada. En virtud de lo anterior, el juzgador deberá verificar si el agente de tránsito que suscribió el mismo, siguió el protocolo establecido por la mencionada norma.

Al respecto, es importante traer a colación la Sentencia No. T-475/18 proferida por la H. Corte Constitucional, dentro de una acción de tutela iniciada en contra de una providencia judicial, en la cual se indicó lo siguiente:

“(…) El marco normativo y el manual permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el CPG o el CPACA para este tipo de prueba. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el informe policial de accidente de tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas (…)”

Es decir, el hecho de que la parte actora no haya aportado este informe como una prueba documental, encamina en primer lugar a no encontrar acreditada la ocurrencia del presunto

accidente de tránsito el día 15 de enero del 2020, junto con ello, no se precisa los vehículos involucrados en el mismo, alejándonos de esta manera a poder identificar plenamente la vinculación y participación del vehículo de placa SOZ-882 en los hechos objeto del litigio y finalmente no se encuentra probada la responsabilidad del conductor del vehículo antes relacionado, toda vez que se debe verificar que el mismo haya sido suscrito con base en las pautas establecidas en la Resolución 0011268 de 2012 y adicional a ello, deberá ser valorado en conjunto con las demás pruebas que se aporten y se practiquen en la etapa probatoria del proceso. Es preciso que no se pase por alto que **el informe policial no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad**, toda vez que el informe de tránsito tiene parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente como informante del suceso. Así pues, el Art. 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“(…) Artículo 149: El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

[...] Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes (...) Sublínea y negrita fuera del texto original.

El Art. 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de la norma:

*“(…) **ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO.** Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa (…)”*

De los anteriores artículos, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia, referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis. Lo anterior, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acredita y, por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad.

Es preciso recordar que existe consenso en la Jurisprudencia y la Doctrina en cuanto a que, tratándose del régimen de Responsabilidad Civil por culpa probada, al demandante corresponde acreditar, siguiendo a Velásquez Posada O. (2013)⁶, los siguientes elementos: **i)** La conducta, **ii)** la culpa o el dolo, **iii)** el daño y **iv)** el nexo de causalidad. Es decir, que el daño sea ocasionado por la conducta dolosa o culposa de la persona de quien se demanda la indemnización del daño. Sobre la acreditación o no de estos presupuestos, podemos indicar que la parte actora no ha logrado acreditar, en este estadio, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del evento de tránsito objeto de la litis propuesta.

Corolario de lo anterior, y teniendo en cuenta que la responsabilidad civil pretendida es de carácter contractual, es evidente que al no probarse la supuesta obligación de la parte pasiva surgida en un contrato, tampoco puede predicarse el incumplimiento de dicha obligación, máxime cuando el presunto hecho originario del incumplimiento alegado, tampoco se encuentra probado, pues **“El contrato es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento”**⁷. En virtud de lo anterior y a partir del material probatorio que obra en el expediente, no resulta posible establecer una conexión entre la sociedad demandada, Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., y el propietario del vehículo SOZ882, por los hechos presuntamente ocurridos el día 15 de enero de 2020, de los cuales, además, tampoco existe prueba.

En consecuencia, los fundamentos probatorios que soportan los hechos de la demanda carecen de elementos necesarios, indispensables e indivisibles de la prueba. Es claro que fracasa cualquier intento de acreditar el suceso a través de dichos medios probatorios.

⁶ Velásquez Posada O. (2013). Responsabilidad Civil Extracontractual, Temis, Bogotá, pág. 92.

⁷ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia SC780-2020 de 10 de marzo de 2020.

De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del accidente recae en cabeza de los demandados.

2. AUSENCIA PROBATORIA DE LOS SUPUESTOS DE HECHO Y DE LOS PERJUICIOS ALEGADOS

Conforme al Art. 164 del CGP., las decisiones judiciales deben imperiosamente tener respaldo en las pruebas que, con observancia de las normas y principios procesales, fueron arrimadas al proceso. De este modo, el principio de la necesidad de la prueba, previsto en el artículo en comento, constituye una garantía a la actuación probatoria que adelantan las partes en el proceso, por lo que mal se haría en despachar favorablemente las pretensiones de la demanda, si las mismas no encuentran sustento en el acervo probatorio; de ser así, se estaría, notoriamente, enervando el principio en cuestión, además del debido proceso.

Bajo la misma línea, el artículo 167 ibidem, indica que corresponde a las partes acreditar los supuestos de hecho que sustentan sus pretensiones. Al respecto, la H. Corte Constitucional⁸, citando a la H. Corte Suprema de Justicia, ha dicho:

En las controversias judiciales, por regla general, cada una de las partes acude al juez con su propia versión de los hechos, esto es, que presenta enunciados descriptivos o proposiciones fácticas a partir de las cuales pretende generar un grado de convencimiento tal, que sea suficiente para que se emita un pronunciamiento favorable al ruego que se eleva ante la jurisdicción. Dicho de otro modo, en el punto de partida de toda controversia procesal, cada uno de los extremos del litigio intenta convencer al juez de que las descripciones que presenta coinciden con la realidad y, a partir de aquéllas, justamente, propicia el litigio.

De esa manera, cuando hay una genuina contención, el sistema exige que cada uno de los contendientes correlativamente contribuya a que el juez supere el estado de ignorancia en el que se halla respecto de los hechos debatidos, tarea que por lo general concierne al demandante respecto de sus pretensiones, y al demandado respecto de las excepciones.

*Desde luego, **al juez no le basta la mera enunciación de las partes para sentenciar la controversia, porque ello sería tanto como permitirles sacar beneficio del discurso persuasivo que presentan; por ende, la ley impone a cada extremo del litigio la tarea de traer al juicio de manera oportuna y conforme a las ritualidades del caso, los elementos probatorios destinados a verificar que los hechos alegados efectivamente sucedieron, o que son del modo como se presentaron, todo con miras a que se surta la consecuencia jurídica de las normas sustanciales que se invocan.*** (Subrayas propias).

⁸ Corte Constitucional, Sentencia C-086 de 24 de febrero de 2016.

Es claro entonces, que acreditar los supuestos de hecho que respaldan las pretensiones de la demanda, constituye en ese caso, una carga procesal en cabeza de la parte demandante. En la misma sentencia, retomando jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, se ha indicado lo siguiente con relación a las cargas procesales.

*(...) las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. **Así, por ejemplo probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa.*** (Negrita fuera del texto original).

Queda entonces claro, que estaba a cargo del extremo actor arrimar al proceso las pruebas que sustentaran sus pretensiones; sin embargo, en el presente caso, la parte actora no solo se sustrajo de dar cumplimiento a la citada carga, sino que, además, anexó documentos que carecen de idoneidad y conducencia para soportar sus peticiones.

Consecuentemente y en ausencia de material probatorio, solicito tener probada la presente excepción y librar de responsabilidad a los demandados.

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LAS PRETENSIONES INVOCADAS EN LA DEMANDA

3. INEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO PRETENDIDO POR LA SEÑORA GLADIS LONDOÑO HERRERA

Se plantea esta excepción no sólo porque los supuestos perjuicios alegados por el actor no comprometen la responsabilidad del extremo pasivo de este litigio sino además porque tampoco se ha acreditado de manera fehaciente que dicho perjuicio en efecto haya existido. Obsérvese que no existe prueba suficiente para demostrar que el lucro cesante consolidado que se solicita se haya causado, pues no hay prueba siquiera indiciaria que señale que la señora Gladis Londoño Herrera se encontrase laborando para la fecha de los hechos, significando esto un obstáculo insalvable para su reconocimiento. Así en tanto que, recuérdese, al Juzgador le está vedada la posibilidad de presumir como cierto un perjuicio de esta naturaleza sin respaldo probatorio.

La H. Corte Suprema de Justicia en lo que respecta a los perjuicios patrimoniales, ha definido el lucro cesante de la siguiente manera:

“(…) El lucro cesante, jurídicamente considerado en relación con la responsabilidad extracontractual, **es entonces la privación cierta de una ganancia esperada en razón de la ocurrencia del hecho lesivo, o, en palabras de la Corte, “está constituido por todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirán luego, con el mismo fundamento de hecho** (….)”⁹. (Negrita y subrayado fuera del texto original)

Se evidencia entonces que la indemnización por lucro cesante consolidado tiene lugar cuando a la víctima se le ha reportado una pérdida económica **cierta**, en razón a la ocurrencia del hecho dañino. Sin embargo, no existe al interior de este proceso una prueba fehaciente en relación a que la señora Gladis Londoño Herrera se hubiere visto mermada o reducida en su capacidad económica como consecuencia de los hechos presuntamente ocurridos el 15 de enero del 2020. Al respecto, basta con observar que NO se allegó prueba técnica idónea para acreditar que efectivamente la demandante se encontraba laborando antes de que se presentara el accidente, ni el monto que presuntamente percibía como resultado de dicha actividad laboral. Es decir, no hay prueba que respalde que, con posterioridad al accidente de tránsito alegado por la activa de la acción la señora Gladis Londoño Herrera no pudo percibir ingresos mensuales como resultado la imposibilidad de realizar una actividad laboral, por tanto, no es de recibo la forma artificiosa en que se pretende hacer ver a esta Judicatura hechos que no se acompañan a la realidad.

En efecto, una vez consultado el Registro Único de Afiliados – RUAF, se observa que la señora Londoño Herrera se encuentra actualmente afiliada al régimen de salud en calidad de *beneficiaria* y no de cotizante, tal como debiera ser si efectivamente realizara las presuntas actividades lucrativas referidas, conforme a los tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud:

INFORMACIÓN BÁSICA					Fecha de Corte:	2023-05-12
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo	
CC 42091442	GLADIS		LONDOÑO	HERRERA	F	

AFILIACIÓN A SALUD					Fecha de Corte:	2023-05-12
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio	
EPS SURAMERICANA S.A.	Contributivo	19/11/2019	Activo	BENEFICIARIO	BOGOTÁ D.C.	

Tal circunstancia lleva a concluir que efectivamente la hoy demandante no percibe ningún tipo de ingreso mensual.

No puede perderse de vista que, de manera uniforme y reiterada, la jurisprudencia ha manifestado que uno de los presupuestos necesarios para reconocer el lucro cesante, radica en la certeza de la causación del detrimento que se alega. Para ello, resulta indispensable que la parte actora acredite

⁹ Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 31 de agosto de 2015. Radicación: 2026-514. M.P: Fernando Giraldo Gutiérrez.

que efectivamente se encontraba en condiciones de recibir unos ingresos ciertamente determinados y que la imposibilidad de percibirlos obedece exclusivamente a la causación del daño. Por esta razón, se descartan todos los pedimentos que se basan en meros planteamientos hipotéticos.

En el presente caso, como primera medida, la parte actora no demuestra siquiera la realización de una actividad lucrativa, de modo que no existe certeza de los ingresos que presuntamente podría haber recibido la nombrada. Pero además, no existe ningún impedimento (mucho menos uno atribuible a la parte pasiva) que indique que el actor disminuyó su capacidad lucrativa o que se encuentra en imposibilidad absoluta de ejercerla, como sería efectivamente una pérdida en la capacidad laboral, que desde luego, no se presentó, comoquiera que el “Dictamen” arrimado por el extremo actor no fue expedido por la autoridad competente, de conformidad con la Ley 100 de 1993 y por tanto, no surte los efectos probatorios que se pretenden.

Sobre el particular, es indispensable anotar que es inoperante cualquier presunción que pretenda aplicarse para inferir, *verbi gracia*, que las condiciones de género o de edad de la demandante permitían considerarlo, sin estar ello probado, que ejercía alguna labor, como pretende afirmarse. Por el contrario, en Sentencia de 18 de julio de 2019, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado¹⁰, unificó los criterios jurisprudenciales en materia de reconocimiento y liquidación de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, y respecto a tales presunciones manifestó:

Aplicada así la “presunción” acabada de mencionar¹¹, lo que se debía identificar no era si el afectado desempeñaba una “actividad productiva” al tiempo de la detención, sino si se encontraba para entonces en una edad “productiva” –entendida como tal aquella en que se alcanza la mayoría de edad y que se mantiene mientras no sobrevenga una incapacidad laboral o cognitiva-, para liquidar el perjuicio material conforme al valor del salario mínimo; pero, entendida así la regla de experiencia, como fundamento de la regla de la jurisprudencia, se puede incurrir –a no dudarlo- en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual, lo cual sucede –por ejemplo- si el afectado, pese a encontrarse en una “edad productiva”, es improductivo, porque por un acto volitivo decide no trabajar y depender de los ingresos que le proporcionan otros, evento en el cual no hay un perjuicio material cierto e indemnizable. (Énfasis propio).

Y más adelante concluyó:

¹⁰ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, radicación 73001-23-31-000-2009-00133-01, de 18 de julio de 2019, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

¹¹ En la providencia se citó: “... en sentencia del 5 de octubre de 2016 (expediente 43.127), se dijo (se transcribe literal): “Aunque en la demanda se afirmó que dicha persona trabajaba en el taller ... como mecánico, no se arrimó al proceso prueba que demostrara esta afirmación. No obstante lo anterior y en vista de que el demandante se encontraba en edad productiva, se presume que al menos debía devengar un salario mínimo mensual legal vigente producto del desempeño de alguna actividad económica. (...)”.

(...) a juicio de la Sala, resulta mejor, con miras a un adecuado ejercicio de la labor de impartir justicia, **soslayar el uso de presunciones de orden jurisprudencial que lleven a reconocer de oficio perjuicios de este tipo**, pues evitarlas y, por tanto, decidir con sustento en hechos o supuestos efectivamente probados garantiza de manera efectiva y eficaz el principio de congruencia de las sentencias. (Negritas ajenas al texto original).

Así las cosas, pretender un reconocimiento por concepto de lucro cesante resulta abiertamente improcedente, comoquiera que, además de no operar presunción en ningún

En conclusión, es claro cómo no se materializó el perjuicio pretendido por la parte demandante, al no encontrarse prueba de que la señora Gladis Londoño Herrera era laboralmente activa para la fecha de los hechos que sirven de base a la acción, sin que, además, medien elementos de convicción que acrediten una disminución o merma en sus ingresos, como consecuencia de los hechos presuntamente acaecidos el 15 de enero de 2020.

Solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

4. INEXISTENCIA DEL LUCRO CESANTE FUTURO PRETENDIDO POR LA SEÑORA GLADIS LONDOÑO HERRERA

Esta excepción se propone habida cuenta que el extremo actor pretende el reconocimiento de esta tipología de perjuicios en su modalidad futura sin contar con elementos que permitan determinar que como consecuencia del accidente de tránsito presuntamente ocurrido el 15 de enero de 2020, la señora Gladis Londoño Herrera haya sufrido una merma o disminución en sus capacidades físicas y/o cognitivas que aparejen una disminución y/o desmejora en su capacidad de desarrollar una actividad laboral.

De conformidad con los Arts. 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las entidades que pueden calificar a una Pérdida de Capacidad Laboral corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en primera instancia y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda. No obstante, esta disposición normativa fue modificada por el Art. 142 del Decreto 019 de 2012, cuyo tenor literal, en lo pertinente, es el siguiente:

*“(...) Corresponde al **Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS,** determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad*

dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las **Juntas Regionales de Calificación de Invalidez** del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la **Junta Nacional de Calificación de Invalidez**, la cual decidirá en un término de cinco (5) días (...). (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Así las cosas, las meras aseveraciones de la parte actora, soportadas en la presunta causación de un lucro cesante futuro, no pueden surtir los efectos probatorios que el demandante pretende. Puesto que es menester que, para efectuar un eventual e hipotético reconocimiento de este concepto, se cuente con un porcentaje de pérdida de capacidad legal que viabilice la liquidación del rubro, de otra manera se estaría realizando una indemnización que desatiende la realidad del daño causado. Por consiguiente, tampoco hay lugar al reconocimiento de los perjuicios pretendidos con base en las meras afirmaciones de la demandante. Respecto a esta modalidad de perjuicios, es necesario rememorar el reciente fallo del 28 de mayo de 2021 proferido por el juzgado 08 Civil del Circuito de Cali, dentro del proceso con radicado 76001-31-03-008-2019-00192-00, mediante el cual se indicó lo siguiente:

“(...) Con respecto al lucro cesante futuro, ha de señalarse que este se trata de la ganancia o provecho que dejará de percibir la demandante, específicamente, su salario. No obstante, del interrogatorio practicado se colige con facilidad que aún se encuentra vinculada laboralmente al Banco de Bogotá y desde la fecha de la ocurrencia del siniestro no ha dejado de percibir su remuneración mensual, cosa distinta es la alegación de las presuntas comisiones por ella devengadas, las cuales, dicho sea de paso, no fueron solicitadas en el escrito introductor y menos y menos acreditadas dentro del presente juicio quedando en el mero dicho y por ende no pueden ser objeto de reconocimiento (...).” (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Ante ello, sobreviene la imposibilidad evidente de acceder al perjuicio deprecado al encontrar demostrado su culminación. Siendo conveniente citar a la H. Corte Suprema de Justicia Sala Civil en sentencia SC3951-2018 del 18 de septiembre de la misma anualidad, donde expuso lo siguiente:

“(...) en cuanto perjuicio, el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. Ahora, sin ahondar en la materia, porque no es del caso hacerlo, esa certidumbre no se opone a que, en determinados eventos, v. gr. lucro cesante futuro, el requisito mencionado se concrete en que el perjuicio sea altamente probable, o sea, cuando es posible concluir, válidamente, que verosímilmente acaecerá, hipótesis en la cual cualquier elucubración ha de tener como punto de partida una situación concreta, tangible, que debe estar presente al momento de surgir la lesión del interés jurídicamente tutelado.

Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afina en una situación real, existente al momento del evento dañino, condiciones estas que, justamente, permiten inferir,

razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente.

(...) Por último, están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables (...)”. (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

En atención a lo anterior, es importante señalar que las pretensiones por este concepto impetradas por la parte demandante carecen de soporte probatorio o fáctico que hagan viable su prosperidad. Lo anterior, pues cómo se ha sostenido con antelación, no obran al interior del expediente elementos que permitan evidenciar que como consecuencia del accidente de tránsito presuntamente ocurrido el 15 de enero del 2020, la señora Gladis Londoño Herrera haya sufrido una merma o disminución en sus capacidades laborales que le imposibiliten el desempeño de algún tipo de funciones.

En efecto, si bien en la demanda se efectuó una liquidación con un porcentaje del 14.9% de PCL, no se observa que al plenario se haya allegado tal dictamen emitido por Junta de Calificación, ni concepto médico emitido por su EPS o su ARL¹² que acredite la gravedad de la lesión y que esta se encuentra en una condición de salud que no le permite ni le permitirá realizar actividades laborales en el futuro. Así como tampoco se allegó certificación laboral, contrato o ningún otro elemento documental que diera por cierto que la accionante se encontraba laborando para la fecha de los hechos y que por lo tanto dejó de percibir un ingreso como resultado del accidente. Siendo necesario reiterar que las infundadas pretensiones de la parte demandante se soportan en meras hipótesis que no se encuentran fehacientemente acreditadas de conformidad con las disposiciones legales, por lo que consecuentemente deben ser despachadas desfavorablemente a los intereses del extremo actor.

En conclusión, es preciso advertir que la estimación de perjuicios realizada por el extremo actor adolece de serios defectos en su liquidación, como quiera que la misma se realiza sin que haya un porcentaje de pérdida de capacidad laboral acreditado. Lo que corresponde a una mera estimación que la policía judicial supuestamente realizó al interior del proceso penal que cursa por estos mismos hechos, sin haber demostrado contar con el conocimiento, experticia e idoneidad para ello

¹² Decreto 019 de 2012, Art. 142 mediante el cual se modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993: “(...) Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días (...)”.

en franca desatención a los parámetros normativos contemplado a partir del Art. 142 mediante el cual se modificó el Art. 41 de la Ley 100 de 1993. Siendo en todo caso preciso advertir que la operación matemática empleada en la demanda desconoce las fórmulas matemáticas empleadas por la H. Corte Suprema de Justicia para la estimación económica de estos perjuicios. Por contera, las determinaciones arbitrarias de la parte actora para liquidar un perjuicio que hasta esta instancia procesal es inexistente por no estar debidamente probado, sólo revela un afán de lucro injustificado.

Con fundamento en lo anterior, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

5. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LA DEMANDANTE

Se propone la presente excepción toda vez que el demandante pretende una cuantiosa indemnización con ocasión de unos supuestos perjuicios extrapatrimoniales derivados del accidente de tránsito presuntamente ocurrido el 15 de enero del 2020, sin que se halle acreditada la materialización de tales perjuicios y desconociendo los rubros tasados y adjudicados por la H. Corte Suprema de Justicia, los cuales sobrepasan los límites reconocidos para el tipo de daño invocado, y por lo tanto su reconocimiento es inviable.

Si bien es cierto que no existen criterios objetivos de aplicación mecánica respecto a la cuantificación de los daños morales, cabe resaltar que los tipos de perjuicios extrapatrimoniales que solicita la parte actora sean reparados económicamente, resultan o tratan de una compleja tipología de perjuicios cuya configuración depende de la existencia de una serie de elementos subjetivos. Lo anterior, además de que su tasación si bien se encuentra deferida “*al arbitrium judicis*”, es decir, al recto criterio del fallador, de todas maneras, deben ser debidamente acreditados, demostrados y tasados por quien los pretende. Teniendo en cuenta adicionalmente, que este tipo de perjuicios “(...) *se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables (...)*”.¹³

Ha señalado igualmente la H. Corte¹⁴ que, dentro de la concepción jurídica de los perjuicios extrapatrimoniales, específicamente respecto al daño moral, por ejemplo, no hay una valoración pecuniaria en sentido estricto, ya que al pertenecer a la psiquis de cada persona “(...) *es inviable de valorar al igual que una mercancía o bien de capital (...)*”. De ahí entonces que sea razonable estimar que, **(i)** en cada caso el Juez realice una valoración concreta, con la debida objetividad y conforme lo que se logre probar en el transcurso del proceso; y, **(ii)** no resulta apropiado que las partes puedan estimar el valor económico de su propio sufrimiento, “(...) *ya que eso iría en contravía*

¹³ Sentencia de casación civil de 13 de mayo de 2008, Exp. 1997-09327-01.

¹⁴ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017- 00405-00.

de la naturaleza especial del perjuicio inmaterial o espiritual, que escapa al ámbito de lo pecuniario (...).”

Lo cierto es que la H. Corte Suprema de Justicia a lo largo de su Jurisprudencia ha establecido unos parámetros para la cuantificación de este. No obstante, desatendiendo a dichos parámetros, el apoderado de la parte actora solicita se realice el pago de \$60.000.000 únicamente en favor de la señora Gladis Londoño Herrera. Monto que superan ostensiblemente el valor reconocido por la H. Corte en casos de lesiones de extrema gravedad¹⁵.

Para este caso en particular, los valores solicitados como indemnización por concepto de perjuicios morales, exceden los valores tasados y adjudicados por la H. Corte Suprema de Justicia en distintos pronunciamientos en los que se han presentado circunstancias similares al caso que nos convoca. Es de rememorar que en reiterada jurisprudencia la H. Corte Suprema de Justicia la sentencia SC5686 de 2018¹⁶ mediante la cual la Corte Suprema de Justicia accedió al pago de \$7.500.000 por perjuicios morales, para la víctima directa, en la resolución de un caso donde ésta sufrió quemaduras considerables en su cuerpo y que generaron cicatrices que van a estar por el resto de su vida. Es decir, un estado notoriamente más gravoso que el supuestamente padecido la actora en el presente trámite.

Así pues, señor Juez, se le solicita de la manera más respetuosa que, en caso de proferir condena a la parte demandada de este proceso, se acoja a los límites Jurisprudenciales definidos por la H. Corte Suprema de Justicia para el tipo de perjuicios reclamados por los demandantes. Máxime, teniendo en cuenta que al plenario no se allegó la historia clínica de la demandante con seguimiento por psicología o psiquiatría, que evidencien que aquella se encuentra efectivamente en una condición emocional o psicológica, o dictamen de pérdida de capacidad laboral o concepto médico emitido por su médico tratante, que haga menester un reconocimiento por el elevado valor solicitado en el líbello genitor. Así las cosas, es menester que quien aduce la generación de este tipo de perjuicios, demuestre plenamente la aflicción sufrida, tanto física como sentimental, para que siquiera, se entre a considerar si tienen lugar o no lugar a obtención de un resarcimiento económico. En tal sentido, tiene dicho la H. Corte¹⁷:

*“(...) Y aunque tal regla está prevista para la cuantía de los procesos, en general, **permite ver que el sistema procesal es reacio a aceptar pretensiones de indemnización inmaterial por montos exagerados, a voluntad de las partes**, ya que así se generan distorsiones en*

¹⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 30 de septiembre de 2016. Radicación No. 2005-00174. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

¹⁶ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC5686 de 19 diciembre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.

¹⁷ Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia, 11 de mayo de 2017, Radicado: 11001-02-03-000-2017-00405-00

las instancias y recursos que razonablemente deben tener los trámites judiciales (...)"
(Subraya y negrilla fuera del texto original).

En conclusión, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, es claro como el extremo actor no solo no probó la configuración del presunto perjuicio moral del cual pretende su indemnización, sino que adicionalmente, sus estimaciones económicas son abiertamente indebidas e injustificadas de conformidad con los parámetros jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia para casos de mayor gravedad de aquel que nos ocupa.

Solicito declarar probada esta excepción.

6. INSUFICIENCIA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN O DAÑO A LA SALUD

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta **cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo**. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, en el asunto que nos asiste, la parte demandante está solicitando la afectación en la vida de relación como resultado de la causación de unas lesiones, sin que se haya incorporado prueba de la gravedad de la lesión ni que efectivamente la misma le genera actualmente una afectación en la forma en la que desarrolla sus actividades normalmente, por lo que el reconocimiento del mencionado perjuicio resulta improcedente.

No está de más resaltar que el daño a la vida de relación es un concepto que hace parte de los perjuicios extrapatrimoniales, distinto al de índole moral, concebido como aquel que se le ocasiona a la persona privándola de la posibilidad de realizar actividades cotidianas, que con anterioridad al hecho dañoso podía realizar sin ningún inconveniente. En palabras de la H. Corte Suprema de Justicia:

"(...) esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la

*privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad (...)*¹⁸. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En primer lugar, debe resaltarse que el daño a la vida en relación es una tipología de perjuicios que ha sido desarrollada solamente en favor de la víctima directa del daño. En tanto su naturaleza es justamente indemnizar a la víctima directa por los daños sufridos. De modo que resulta improcedente dicho reconocimiento a cualquier otro reclamante distinto de la víctima directa. Lo anterior ha sido reafirmado por la H. Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia, en la que se ha indicado que no resulta viable condenar al pago de suma alguna a título de daño a la vida de relación a una persona diferente a la víctima por circunstancias que no impliquen menoscabo a la integridad psicofísica. Como se lee en la Sentencia del 29 de marzo de 2017 proferida por dicha Corporación, en la que se indicó lo siguiente:

“(...) b) Daño a la vida de relación:

*Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)*¹⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De lo anterior se colige que la etiología de dicho perjuicio está estructurada para ser declarado únicamente en cabeza de la víctima directa por afectaciones psicofísicas que se encuentren debidamente acreditadas. De modo que cualquier reclamación sin la debida acreditación está llamada a fracasar. En este sentido, se observa que en el caso particular el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, por cuanto que no se allegó prueba fehaciente de su causación.

En todo caso, es importante señalar que el perjuicio solicitado a título de daño a la vida de relación resulta exorbitante, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia para la tasación del daño a la vida de relación en caso de lesiones, que es el presupuesto bajo el cual podría eventualmente realizarse este reconocimiento, y que en este asunto no se materializó. En efecto, la H. Corte Suprema de Justicia ha fijado como límite indemnizatorio en caso de lesiones que generan una incapacidad total y permanente la suma de 50 SMMLV, tal y como se observa a continuación:

“(...) Por lo tanto resulta acorde justipreciar el daño a la vida de relación padecido por tal demandante en cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (50 SMMLV) por cuanto, ha sentado la doctrina de esta Corte, dada su stirpe extrapatrimonial es propia del

¹⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia del 13 de mayo de 2008. Ref.: 11001 3103 006 1997 09327 01. M.P: César Julio VALENCIA COPETE.

¹⁹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-039- 2011-00108-01. Marzo 29 de 2017

*prudente arbitrio del juez (arbitrium iudicis), acorde con las circunstancias particulares de cada evento (...)*²⁰*

Ahora teniendo en cuenta lesiones mucho más gravosas, el precedente jurisprudencial ha decantado lo siguiente:

- Caso de amputación de la pierna derecha de la víctima de un accidente de tránsito (joven de 25 años de edad), situación que también se aparta de una lesión como la sufrida por el hoy demandante. La Corte Suprema de Justicia 12 confirmó la Sentencia del día 20 de Agosto de 2015 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante la cual se otorgó a la víctima el importe de 25 salarios mínimos mensuales vigente que equivalían a la suma de \$19.531.050 (monto que en dicha sentencia fue reducida por concurrencia de culpas), por concepto de alteración a las condiciones de existencia y/o daño a la vida en relación²¹.
- Caso de una joven de 17 años, lesionada como consecuencia de un accidente de tránsito, con una pérdida de capacidad laboral 20.65% y deformidad física de carácter permanente, y quien tuvo una “derivación ventrículo peritoneal”, procedimiento para remover el líquido en exceso del cerebro. La Corte Suprema de Justicia Sala Civil, profiere sentencia sustitutiva mediante la cual otorga a la víctima, por concepto de daño a la vida en relación, la suma de \$20.000.000²².

En ese sentido, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, la tasación del perjuicio inmaterial se determina por el *arbitrium iudicis*. En razón a la aplicación del valor de la equidad. No obstante, ello debe estar precedido de una fuerte valoración probatoria que permita discernir las condiciones especiales del caso, toda vez que el criterio referido no puede confundirse con la arbitrariedad:

*“(...) Claro está que ese arbitrio iuris no puede confundirse nunca con la arbitrariedad, ni siquiera con un amplio margen de liberalidad o subjetivismo, toda vez que el mismo debe estar fundamentado en un objetivo examen de las pruebas que demuestren la participación de cada uno de los agentes y su incidencia en el desencadenamiento del daño. Esa cuantificación deberá realizarse, además, en términos de prudencia y razonabilidad, a fin de establecer la equitativa proporción que corresponde a cada uno de los autores del hecho lesivo (...)*²³*

²⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Expediente 73001-31-03-002-2009-00114-01. Noviembre 12 de 2019

²¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. SC2107-2018, Radicación: 11001-31-03-032-2011-00736-01, 12 de Junio de 2018 M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

²² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. SC5885-2016, Radicación n.º 54001-31-03-004-2004-00032-01. 06 de mayo de 2016. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

²³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Rad. 05266-31-03-001-2004-00172-01. Diciembre 18 de 2012

Es por ello que, se advierte que el extremo actor realizó una solicitud indemnizatoria que en realidad es improcedente, por cuanto que el daño a la vida de relación se deprecia de la existencia de lesiones debidamente acreditadas, y de otro lado, en todo caso, el reconocimiento que invoca es superior para los casos de lesiones más graves. De manera que se evidencia una desmesurada solicitud de perjuicios por concepto de daño a la vida en relación por valor de \$60.000.000 a favor de la señora Gladis Londoño Herrera. Claramente, es evidente el ánimo especulativo de la errónea tasación del daño a la vida en relación, en tanto la misma resulta exorbitante. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños a la vida de relación que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la H. Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, ante la desmesurada solicitud por concepto de daño a la vida en relación, es evidente el ánimo especulativo y la errónea tasación de los perjuicios, en tanto los mismos resultan exorbitantes. Lo anterior, como quiera que se derivan de una estimación excesiva de los supuestos daños que pretende y lejos de los criterios jurisprudenciales fijados por la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida al interior del proceso con radicado 73001-31-03-002-2009-00114-01.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, porque, sumado a la ausencia de demostración de la responsabilidad que se pretende endilgar, no es viable el reconocimiento por razones distintas a afectaciones psicofísicas debida y fehacientemente acreditadas, y por cuanto, además, y sin perjuicio de lo anterior, las sumas solicitadas exceden los límites concedidos por esta jurisdicción para este tipo de perjuicio.

Por todo lo anterior, solicito respetuosamente al Juzgador declarar probada esta excepción.

7. EL DOCUMENTO DENOMINADO “DICTAMEN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL Y OCUPACIONAL” NO FUE EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE

De conformidad con los artículos 41 y siguientes de la Ley 100 de 1993, las entidades que pueden calificar una Pérdida de Capacidad Laboral corresponden a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, en primera instancia, y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en segunda. No obstante, esta disposición normativa fue modificada por el artículo 142 del decreto 019 de 2012, la cual claramente advierte la ausencia de valor probatorio de dicho elemento documental.

El tenor literal del artículo 142 del decreto 019 de 2012, en lo pertinente, es el siguiente:

Corresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias. En caso de que el interesado no esté de acuerdo con la calificación deberá manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes y la entidad deberá remitirlo a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez del orden regional dentro de los cinco (5) días siguientes, cuya decisión será apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, la cual decidirá en un término de cinco (5) días.

De este modo, es claro que dicha calificación no es una facultad que pueda asumir un particular, en tanto la ley de manera expresa ha manifestado quiénes son los determinados para calificar la pérdida de capacidad laboral de una persona.

Descendiendo al caso concreto, tenemos que el supuesto dictamen referido no fue elaborado por ninguna de las instituciones anteriormente nombradas, sino por el médico Juan Manuel Hincapié Medina, razón por la cual el documento arrimado al expediente no puede surtir los efectos probatorios que pretende y tampoco, en consecuencia, hay lugar al reconocimiento de los perjuicios pretendidos con base en él.

En los términos expuestos, ruego al despacho declarar probada la presente excepción

EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

8. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

Se formula esta excepción en razón a que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en

términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia²⁴, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte²⁵ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)”* (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero de 2020, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

²⁴ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

²⁵ Ibídem.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite como quiera que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

9. AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA No. 1000098 Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN EXCESO 1000100 EXPEDIDA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. FRENTE A TERCEROS NO PASAJEROS

Se propone esta excepción, sin que con ello se comprometa mi representada, para manifestar que en el curso del proceso, como se ha demostrado, no es posible endilgar responsabilidad al conductor del vehículo SOZ-882, y por ende a la compañía aseguradora que represento, por la supuesta ocurrencia del accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020, comoquiera que dentro del plenario no obra prueba de la supuesta relación contractual entre la señora Gladis Londoño Herrera y la sociedad demandada, ni del mentado accidente reseñado en el escrito demandatorio.

En ese sentido, el artículo 1131 del Código de Comercio establece que “(...) *En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado (...)*” De ahí que surge la necesidad de que el hecho originario del proceso, en este caso, el supuesto accidente de tránsito del día 15 de enero de 2020 se constituya en la causa de los supuestos daños padecidos por la actora. No obstante, como ello no ocurre, tampoco puede surgir la pretendida obligación indemnizatoria a cargo de mi procurada.

Es importante señalar en primer lugar que, en el espectro de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la parte aseguradora puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que está expuesto el interés asegurado, con fundamento en la facultad que se consagra en el Art. 1056 del C. Co. Es de esta forma como al suscribir el contrato asegurativo respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo acuerdo. De manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes. La H. Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

“(...) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha

extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato aseguraticio. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...)”²⁶

Entre las condiciones que se pueden pactar por los contratantes, es posible encontrar la determinación de límites temporales, territoriales, sobre la cuantía y de la ocurrencia de circunstancias específicas. En esa categoría, la relación sustancial que rige las obligaciones de mi mandante, necesariamente se sujetará a las diversas condiciones de los contratos de seguro, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo. Luego, son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de las obligaciones de mi prohijada, al contenido de las condiciones de la correspondiente póliza.

Consecuentemente, la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, frente a los hechos que se prueben en el proceso, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según lo pactado y no a cualquier evento, ni a cualquier otro riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo. En materia de seguros, el asegurador, según indica el Art. 1058 del C. Co.: “(...) *podrá, a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado o la cosa asegurados (...)*”. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que amparo opera o es efectivo, las causales de exclusión o en general las de exoneración, además de las de origen legal, etc. Por tanto, son esos los parámetros a los que tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la póliza vinculada.

²⁶ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC4574-2015. Radicación No. 11001-31-03-023-2007-00600-0.

Aterrizando al caso en concreto, observamos que en el condicionado de la póliza de responsabilidad civil contractual vinculada se estableció el objeto del seguro en los siguientes términos:

*EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO TIENE POR OBJETO INDEMNIZAR O REEMBOLSAR AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES SEA CIVILMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADA O MEDIANTE ACUERDO O TRANSACCIÓN AUTORIZADA DE MODO EXPRESO POR SBS COLOMBIA, POR HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, **EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL**, SEGÚN APAREZCA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL “CUADRO DE DECLARACIONES” DE LA PRESENTE PÓLIZA, **DERIVADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS**, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA... (Énfasis propio).*

En concordancia con lo anterior, a los efectos del referido contrato de seguro, se entiende por *pasajero*, conforme a lo pactado en sus condiciones generales: “(...) A TODA PERSONA TRANSPORTADA **QUE SEA PORTADORA DE UN PASAJE O FIGURE EN LA LISTA DE PASAJEROS DEL VEHÍCULO ASEGURADO** (...)” (Resaltado propio).

Bajo tales presupuestos, se reitera que el supuesto contrato de transporte aducido por la demandante no se encuentra probado dentro del proceso y por lo mismo, tampoco resulta acreditada su alegada condición de pasajera del vehículo SOZ-882. Consecuentemente, y al no existir responsabilidad civil de los demás demandados, tampoco nace la obligación indemnizatoria de mi representada, conforme a las estipulaciones concertadas en la póliza en cuestión.

En ese entendido, y siendo claro que el seguro de responsabilidad impone a la aseguradora la obligación de indemnizar los perjuicios que sean ciertamente causados por el asegurado, sin existir prueba siquiera de la ocurrencia del accidente de tránsito ni mucho menos de la injerencia del actuar del conductor del vehículo SOZ-882 en el supuesto accidente motivo de este pleito, no es de cargo de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** responder por presuntos daños que no fueron ocasionados por su asegurado, comoquiera que no se realiza el riesgo asegurado por la Compañía.

Al respecto, se debe resaltar que los amparos otorgados por mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., dentro de la mentada Póliza de Responsabilidad Civil Contractual fueron los siguientes:

CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL SEGURO.

1.1. EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO TIENE POR OBJETO INDEMNIZAR O REEMBOLSAR AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES SEA CIVILMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADA O MEDIANTE ACUERDO O TRANSACCIÓN AUTORIZADA DE MODO EXPRESO POR SBS COLOMBIA, POR HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, SEGÚN APAREZCA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL "CUADRO DE DECLARACIONES" DE LA PRESENTE PÓLIZA DERIVADA DEL

TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ASÍ:

De lo anterior, se concluye que los amparos otorgados por la compañía aseguradora que represento, plasmados en la carátula de la Póliza de Responsabilidad Civil aludida, están encaminados a proteger los perjuicios que ocasione el asegurado a pasajeros derivados del transporte terrestre, consecuencia de la responsabilidad civil contractual en la que incurra o se le impute en un hecho accidental, tal y como se estipuló en las condiciones generales:

1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL:

MUERTE, INCAPACIDAD PERMANENTE, INCAPACIDAD TEMPORAL Y GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS, CAUSADOS A PASAJEROS, COMO CONSECUENCIA DE ACCIDENTE DERIVADO DEL TRANSPORTE, SEGÚN LO

Por lo expuesto, a pesar de que en el asunto que nos ocupa no se han configurado los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en caso de evidenciarse los mismos, debo manifestar que no habría cobertura para los hechos que son materia del presente litigio, toda vez que, como se explicó anteriormente, mi representada, a través de la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098 y La Póliza De Responsabilidad Civil Contractual En Exceso 1000100, únicamente ampara los perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual en la que incurra el asegurado, que se traduzca en un perjuicio a un pasajero; sin embargo, contrario a ello, tal y como se expone en la demanda, la señora Gladis Londoño Herrera, formula la demanda en calidad de pasajera, circunstancia esta no ha sido acredita por parte de la demandante, dando de esta

manera a no tener certeza sobre la verdadera calidad en la cual actúa la señora Gladis Londoño Herrera y el verdadero origen de sus presuntas lesiones, de manera que, frente a la mentada Póliza no sólo se resalta que no se ha configurado ningún siniestro, sino que además, los hechos que son objeto del litigio configuran una causal de exclusión y por ende, es inexistente la obligación indemnizatoria por parte de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

10. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., CON BASE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL BÁSICA Y EN EXCESO, PORQUE NO SE ACREDITÓ LA REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO NI LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.

Es necesario aclarar que para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la Aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza y es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de la Compañía de Seguros.

El Art. 1077 del C. Co. reza lo siguiente: ***“ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. (...) El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.”*** (negrilla fuera del texto original)

“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)” “(...) Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida. (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en

breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)"²⁷

Es por ello, que podemos concluir que, en todo tipo de contrato de seguros, cuando se requiera hacer efectiva una garantía, se deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y **necesariamente, se acreditará la cuantía** que por el mismo se ha perdido, cuestión que, conforme se argumentado de manera amplia, no se ha demostrado hasta el momento.

Para el caso que nos ocupa, encontramos que aún no hay una aclaración en la ocurrencia del hecho, y con ello no se encuentra probada la necesidad de una reparación, que atendiendo lo establecido en el Art. 1077 del C. Co, la carga de la prueba están en cabeza de la parte demandante, misma que no cumplió con dicho presupuesto, no se encuentra acreditada la cuantía razonable que se pretende como indemnización.

Por lo expuesto solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

11. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el convocante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro de daños que sirvió de soporte a la presente acción, como se consagra en el Art. 1088 del C. Co. Norma que establece que jamás el seguro podrá constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento, por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del Asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el Art. 1089 ibídem, también infringida por el convocante. Por lo que la excepción se propone para efectos de que el Despacho tenga en consideración el carácter meramente indemnizatorio del contrato vinculado y en atención del mismo resuelva la relación sustancial de mi mandante en estricta aplicación de las condiciones que rigen el aseguramiento.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la H. Corte Suprema de justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

"(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de

²⁷ ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. "Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos". Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125

seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)"²⁸(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro de daños, como el que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el Art. 1088 del C. Co. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte de los accionados, implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte Demandante recibiendo una indemnización por parte de los demandados que nada tuvieron que ver con los perjuicios invocados en el libelo genitor.

Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado principalmente que: **(i)** No es procedente el reconocimiento de perjuicios morales ni de daño a la vida de relación, por cuanto es claro que no hay responsabilidad alguna de los accionados. Adicionalmente, la solicitud sobrepasa los topes indemnizatorios establecidos por la H. Corte suprema de Justicia, sin que haya prueba de la pérdida de capacidad de la víctima directa. **(ii)** No es procedente el reconocimiento por lucro cesante, como quiera que no existe calificación de pérdida de capacidad laboral que indique el aparente deterioro de la condición de salud de la accionante. Así como tampoco existe prueba en el expediente que acredite o demuestre que el accidente hubiese dejado secuelas. Adicionalmente, en el improbable caso de considerar la existencia de una lesión, deberá tenerse en cuenta que no se probó cómo es que la misma causó una afectación emocional, sumado a que los perjuicios se encuentran tasados de manera exorbitante según los criterios jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia.

En conclusión, es preciso reiterar que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente

²⁸CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción

12. EN CUALQUIER EVENTO, LA OBLIGACIÓN DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA NO PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DE LOS AMPAROS OTORGADOS A TRAVÉS DE LA PÓLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000098 Y LA PÓLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN EXCESO No. 1000100

Sin perjuicio de los argumentos expuestos a través de este documento, se propone esta excepción, sin que con ello se esté comprometiendo a mi representada, a fin de manifestar que en el improbable caso en que el despacho considerara que nace obligación indemnizatoria a cargo de la compañía aseguradora, la misma deberá sujetarse al tenor literal de las condiciones particulares y generales de la Póliza número 1000098, entre ellas la suma máxima a la cual estaría eventualmente obligada SBS Seguros Colombia S.A.

Al respecto, el Código de Comercio en su artículo 1079, ha previsto: “*El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”; siendo, así las cosas, en el improbable caso de proferirse una condena a mi representada, esta se verá condicionada a los valores asegurados en el contrato y a los deducibles pactados en el mismo.

En orden de lo comentado, las condiciones pactadas en el referenciado contrato indicarán el tope de su obligación indemnizatoria, en el remoto caso en que se profiera una sentencia adversa a los intereses de mi representada. Tales condiciones fueron establecidas así:

AMPAROS Y COBERTURAS		
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	
MUERTE ACCIDENTAL - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$	60. SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$	60. SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$	60. SMMLV
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$	60. SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	\$	0.00
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	0.00
ASISTENCIA JURIDICA PROCESO PENAL Y/O CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO	\$	0.00
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	0.00

Así las cosas, en cualquier evento, la obligación de la compañía nunca podrá exceder el límite arriba indicado, equivalente a 60 SMLMV, correspondientes al amparo de *INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL – RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL*, que a la fecha de ocurrencia de los

hechos ascienden a cincuenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil ciento ochenta pesos (\$52.668.180), porque con ello, además, se garantiza el equilibrio económico que llevó a **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** a asumir el riesgo asegurado.

Por otro lado, se resalta también que mi procurada expidió además la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000100, vigente entre el 30 de noviembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020, que opera en exceso de la cobertura primaria pactada en la póliza número 1000098, cuya obligación se pactó en los siguientes términos:

AMPAROS Y COBERTURAS	
COBERTURA	VALOR ASEGURADO
MUERTE ACCIDENTAL - RCC EXCESO	\$ 100. SMLLV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE - RCC EXCESO	\$ 100. SMLLV
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL - RCC EXCESO	\$ 100. SMLLV
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RCC EXCESO	\$ 100. SMLLV
AMPARO PATRIMONIAL	\$ 0.00
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$ 0.00
ASISTENCIA JURIDICA PROCESO PENAL Y/O CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO	\$ 0.00

Así las cosas, el límite del valor asegurado que con cargo a la póliza No. 1000100 equivale a 100 SMLMV, correspondientes al amparo denominado *INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL – RCC EXCESO*, que a la fecha de ocurrencia de los hechos ascienden a la suma de ochenta y siete millones setecientos ochenta mil trescientos pesos (\$87.780.300), que se insiste, solo opera en exceso de la cobertura pactada en la póliza número 1000098.

Finalmente, se aclara que, dado que los contratos de seguro anteriormente identificados amparan la totalidad del parque automotor, la disponibilidad de las sumas aseguradas dependerá de los pagos que se hubieren efectuado con cargo a dichas coberturas primarias y/o en exceso.

13. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del C. Co., el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la Aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismo hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

14. EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO No. 1000098

Es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro documentado en la póliza de responsabilidad civil contractual No. 1000098 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** y que delimitan la extensión del riesgo asumido por ella, denominadas causales de exclusión. Las cuales en virtud de lo dispuesto en el Art. 282 del CGP y del artículo 1056 del C. Co, pido declarar probadas una vez se acredite dentro del proceso su configuración.

En efecto, en las condiciones pactadas en el aseguramiento se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita los parámetros del negocio asegurativo. Ahora bien, tal y como lo señala el Art. 1056 del C. Co, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) **ARTÍCULO 1056. <ASUNCIÓN DE RIESGOS>**. *Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)*”. En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decide otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura, las cuales efectivamente se encuentran insertas en el aseguramiento que nos vincula, en la cláusula segunda de su condicionado general.

En consecuencia, de hallarse configurada alguna causal de exclusión contenida en el contrato de seguro, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese sentido, solicito respetuosamente al despacho que, en aplicación de lo previsto en el Art. 282 del CGP, una vez advertida la configuración de una de las causales de exclusión se le de aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses que atañen a mi prohijada.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

15. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el Art. 282 del CGP²⁹, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante demanda directa.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juez, declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO II

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA. Y EL SEÑOR GUILLERMO ANDRÉS LÓPEZ A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. EN VIRTUD DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000098 Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1000283

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL PRIMER LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente al hecho “1”: Es cierto que actualmente cursa en el presente despacho, proceso de responsabilidad civil contractual, formulado por la señora Gladis Londoño Herrera, quien pretende el reconocimiento de un pago indemnizatorio como consecuencia del presunto accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero de 2020. Pese a ello, es preciso advertir que a mi representada no le consta que las lesiones personas sufridas por la demandante, sean originarias de un presunto accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero del 2020, como quiera que la parte activa no ha probado fehacientemente dichas exposiciones.

Frente al hecho “2”: El presente hecho expone varias manifestaciones, ante las cuales procedo a pronunciarme al respecto así:

- No le consta a mi procurada que las lesiones padecidas por la señora Gladis Londoño Herrera, fueran consecuencia del presunto accidente de tránsito del 15 de enero del 2020, como quiera

²⁹ **Artículo 282. Resolución sobre excepciones.** En cualquier tipo de proceso, cuando el Juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.

Si el Juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el Juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

que el escrito de la demanda adolece de argumentos fácticos y jurídicos que den cuenta a mi procurada del verdadero origen de las presuntas lesiones.

- Respecto del vehículo de placa SOZ-882 estuvo involucrado en el presunto accidente de tránsito, es una circunstancia que no le consta a mi representada, comoquiera que la misma no tuvo participación o injerencia en la ocurrencia de los supuestos hechos. Es preciso exponer nuevamente, que el escrito genitor adolece de elementos probatorios que permita establecer con claridad y de manera fehaciente las verdaderas circunstancias de modo, tiempo y lugar, considerando que no reposa en el dossier Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que permitirá dar cuenta en primer lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito señalado por la demandantes, ocurrido el día 15 de enero del 2020, en segundo lugar, poder identificar los vehículo involucrados, la hipótesis del caso, y finalmente analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al presunto accidente. Es por expuesto, que solicito se pruebe lo manifestado.
- Finalmente, respeto de la propiedad del vehículo de placa SOZ-882 no le consta a mi representada que el señor Guillermo Andrés Gómez sea el propietario del mismo, pues no se anexa al presente escrito de llamamiento prueba siquiera sumaria que permita dar cuenta a mi procurada la veracidad de lo expuesto. De modo que, solicito su acreditación fáctica en virtud del principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

Frente al hecho “3”: El presente hecho expone varias manifestaciones, pronunciando al respeto frente a cada una así:

- Es cierto que entre la empresa transportadora Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., y mi procurada existe una relación contractual, con base en un Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283. Sin embargo, en este punto es preciso resaltar desde ya que la póliza de responsabilidad civil extracontractual no presta cobertura material al presente asunto, como quiera que la misma está encaminada a reparar a daños y perjuicios ocasionados con el vehículo asegurado de placa SOZ-882 a TERCEROS NO PASAJEROS, resaltando que la señora Gladis Londoño Herrera, formula demanda de responsabilidad civil “contractual” bajo su presunta calidad de “pasajero”. Bajo lo expuesto, se resalta que la póliza de responsabilidad civil extracontractual NO ampara el presunto riesgo que llegare a configurarse en cabeza del conductor del vehículo asegurado. De otro lado, la póliza de responsabilidad civil contractual tampoco podría afectarse, toda vez que no ha sido probada la ocurrencia del riesgo asegurado tal cual lo establece el Art. 1077 del C. Co., y en ese orden de ideas no hay prueba alguna que permita establecer de manera

fehaciente la responsabilidad del conductor por los presuntos daños alegados por la parte demandante.

- Frente al pago de los perjuicios que llegaren a ocasionarse dentro del presente litigio, es preciso resaltar que la mera existencia del contrato de seguro, no obliga a mi procurada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., a generar algún tipo de erogación económica en favor de la señora Gladis Londoño Herrera, pues se precisa que el contrato celebrado entre la empresa transportadora y mi procurada está sometida a las disposiciones legales y contractuales, dentro del cual se establece en primer lugar que el asegurado debe probar la ocurrencia del riesgo asegurado, y junto con ello la cuantía perdida³⁰. Circunstancia misma, que en el presente proceso no se ha establecido.

Frente al hecho “4”: Lo señalado en el presente apartado no es un hecho propiamente dicho, sino que es la mera extracción de lo consignado en el Art. 64 del C.G.P.

Frente al hecho “5”: El presente hecho expone diferentes manifestaciones, ante las cuales me pronunciare al respecto así:

- No le consta a mi representada que el vehículo de placa SOZ-882 se haya encontrado involucrado en el presunto accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero del 2020, como quiera que dentro del expediente la parte actora no presento documento alguno que permita de manera fehaciente establecer la veracidad de lo expuesto, ni mucho menos reposa IPAT, documento que daría cuenta de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la presunta participación del vehículo asegurado, la hipótesis del accidente, y demás situaciones entorno al origen del accidente mencionado.
- Es cierto que, dentro de los contratos de seguro, documentados en las Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098 y Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283 aparece el señor Guillermo Andrés Gómez como asegurado y la Cooperativa de Transportadores de Occidente como tomador.

Frente al hecho “6”: Es cierto que las pólizas relacionadas en el presente llamamiento contaban con una vigencia desde el 30 de noviembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020, y que se encontraban vigentes para la ocurrencia del presunto accidente de tránsito del día 15 de enero del 2020. Pese a ello, no le asiste a mi procurado ninguna obligación indemnizatoria, recordando en primer lugar, que la póliza de responsabilidad civil extracontractual no presta cobertura material, por

³⁰ ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

cuanto la misma esta destina a reparar los daños y/o perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS. Y frente a la póliza de responsabilidad civil contractual, le asiste al asegurado la obligación en primer lugar de probar de manera cierta y fehaciente la ocurrencia del riesgo asegurado, y junto con ello el valor perdido, circunstancias mismas que dentro del presente proceso no ha podido ser acreditado, toda vez que el escrito demandatorio adolece del Informe Policial de Accidente de Tránsito que en primer lugar nos permite corroborar la ocurrencia del accidente de tránsito, y junto con ello las circunstancias de modo, tiempo, lugar, incluyendo las víctimas y participantes de los hechos, pues no hay documento alguno que de manera fehaciente permita establecer la responsabilidad del conductor por los presuntos daños expuesto por la demandante.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL PRIMER LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente a la pretensión “1”: sin perjuicio de que el llamamiento ya fue admitido, **ME OPONGO** a la mentada pretensión, por cuanto, a pesar de que se no se desconoce la existencia de los contratos de seguro celebrados entre la empresa Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., el señor Guillermo Andrés Gómez y mi representada, es preciso indicar que: **(i)** la póliza de seguro de R.C.E. No. 1000283 no presta cobertura material frente a los hechos deprecados en la demanda, por cuanto la póliza antes relacionada tiene como objeto reparar los daños y perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS, situación está que es totalmente ajena al caso que nos convoca, toda vez que la señora Gladis Londoño Herrera, formula la demanda de responsabilidad civil, presuntamente bajo la calidad de pasajera de vehículo de placa SOZ-882.; **(ii)** la póliza de seguro de R.C.C. No. 1000098, tampoco puede afectarse, toda vez que el amparo otorgado únicamente tiene cabida previa **demostración** de la responsabilidad contractual en cabeza del asegurado, es decir previa acreditación de la ocurrencia del riesgo asegurado, lo cual no ha ocurrido por cuanto, el escrito demandatorio adolece de los argumentos facticos y probatorios que permita en primer lugar establecer la ocurrencia del hecho dañoso, pues se evidencia que no hay IPAT del presunto accidente de tránsito o informe alguno de la autoridad competente que evidencie las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la ocurrencia de los presuntos hechos que le causaron los supuestos daños alegados por la demandante. En ese orden de ideas, reiteramos que no hay prueba fehaciente que nos permita acreditar la presunta responsabilidad del conductor del vehículo de placa SOZ-882 con los daños que pretenden endilgar la señora Gladis Londoño.

Por lo expuesto solicito se despache desfavorable la presente pretensión.

Frente a la pretensión “2”: sin perjuicio de que el llamamiento ya fue admitido, **ME OPONGO** a la mentada pretensión, por cuanto, a pesar de que se no se desconoce la existencia de los contratos de seguro celebrados entre la empresa Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., el señor

Guillermo Andrés Gómez y mi representada, es preciso indicar que: **(i)** la póliza de seguro de R.C.E. No. 1000283 no presta cobertura material frente a los hechos deprecados en la demanda, por cuanto la póliza antes relacionada tiene como objeto reparar los daños y perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS, situación está que es totalmente ajena al caso que nos convoca, toda vez que la señora Gladis Londoño Herrera, formula la demanda de responsabilidad civil, presuntamente bajo la calidad de pasajera de vehículo de placa SOZ-882.; **(ii)** la póliza de seguro de R.C.C. No. 1000098, tampoco puede afectarse, toda vez que el amparo otorgado únicamente tiene cabida previa **demostración** de la responsabilidad contractual en cabeza del asegurado, es decir previa acreditación de la ocurrencia del riesgo asegurado, lo cual no ha ocurrido por cuanto no ha sido acreditado la ocurrencia del hecho asegurado, y que la misma haya sido cometida con culpa o dolo por el conductor del vehículo de placa SOZ-882, pues es necesario reiterar que el escrito genitor se caracteriza por la ausencia de argumentos facticos y probatorios que den cuenta de la ocurrencia de los presuntos hechos expuestos por la demandante. Es preciso recordar que no hay documento alguno emitido por autoridad competente que evidencien las circunstancias de modo, tiempo y lugar que presuntamente causaron las lesiones personales y los daños que se pretende endilgar por parte de la demandante. Se resalta que en plenario probatorio del escrito demandatorio no se allega al menos la investigación penal y/o IPAT del accidente de tránsito, que den cuenta de la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado.

En ese orden de ideas, solicito señor juez se despecha desfavorable la presente pretensión.

Frente a la pretensión “3”: se refiere esta pretensión a una actuación procesal que ya se encuentra agotada en esta etapa del proceso.

Frente a la pretensión “4”: se refiere esta pretensión a una actuación procesal que ya se encuentra agotada en esta etapa del proceso.

III. EXCEPCIONES FRENTE AL PRIMER LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

Se formula esta excepción en razón a que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia³¹, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte³² igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)”* (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad

³¹ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

³² Ibídem.

pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero de 2020, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite como quiera que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

2. AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1000283 EXPEDIDA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. POR CUANTO NO AMPARA PERJUICIOS DERIVADOS DE PASAJEROS

Se formula esta excepción, debido a que en el hipotético y eventual caso de que prosperaran las pretensiones de los actores, no habría cobertura para los hechos que son materia del presente litigio, toda vez que, mi representada, respecto a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, no convino amparar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil CONTRACTUAL, esto es, los que se ocasionen en razón del incumplimiento del contrato de transporte suscrito entre los pasajeros y la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., pues estos, lógicamente, transgreden la naturaleza del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, e incluso, se encuentran excluidos expresamente dentro de sus condiciones particulares y generales.

Es importante señalar en primer lugar que, en el espectro de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la parte aseguradora puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que está expuesto el interés asegurado, con fundamento en la facultad que se consagra en el Art. 1056 del C. Co. Es de esta forma como al suscribir el contrato asegurativo respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo acuerdo. De manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes. La H. Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...)”³³

Entre las condiciones que se pueden pactar por los contratantes, es posible encontrar la determinación de límites temporales, territoriales, sobre la cuantía y de la ocurrencia de circunstancias específicas. En esa categoría, la relación sustancial que rige las obligaciones de mi mandante, necesariamente se sujetará a las diversas condiciones de los contratos de seguro, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo. Luego, son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de las obligaciones de mi prohijada, al contenido de las condiciones de la correspondiente póliza.

Consecuentemente, la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, frente a los hechos que se prueben en el proceso, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según lo pactado y no a cualquier evento, ni a cualquier otro riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo. En materia de seguros, el asegurador, según indica el Art. 1058 del C. Co.: *“(…) podrá, a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado o la cosa asegurados (...)”*. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que amparo opera o es efectivo, las causales de exclusión o en general las de exoneración, además de las de origen legal, etc. Por tanto, son esos los parámetros a los que tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la póliza vinculada.

³³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC4574-2015. Radicación No. 11001-31-03-023-2007-00600-0.

Para aclarar el argumento anterior, se precisa indicar que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, expidió la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283 con ocasión del contrato de seguro suscrito entre la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., el señor Guillermo Andrés Gómez y aquella como Compañía Aseguradora, vigente desde el 30 de noviembre del 2019 al 30 de noviembre de 2020, no obstante, debe indicarse que dicho contrato de seguro, únicamente tiene el fin de cubrir los daños o perjuicios que ocasione el asegurado, que en este caso es el propietario del mencionado vehículo o la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., **derivados de la responsabilidad extracontractual que le sea imputada frente a terceros NO PASAJEROS.**

Entonces, a pesar de la existencia de un contrato de seguro tomado por la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., materializado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, de acuerdo con la carátula de la misma, los hechos y pretensiones de la presente demanda, no configuran una obligación en cabeza de mi representada **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, por cuanto dicha póliza (i) únicamente tiene el fin de cubrir los daños o perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad extracontractual que ocasione a terceros NO PASAJEROS y (ii) se encuentran expresamente excluidos los perjuicios originados directa o indirectamente de lesiones o muerte de ocupantes del vehículo asegurado, tal y como se procederá a exponer de manera detallada en la excepción siguiente.

Al respecto, se debe resaltar que los amparos otorgados por mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., dentro de la mentada Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual fueron los siguientes:

2.1.1 AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

SBS COLOMBIA CON SUJECCIÓN A LAS COBERTURAS CONTRATADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y A LAS CONDICIONES Y DEDUCIBLES ACORDADOS INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS EN QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y POR RAZÓN DE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL INCURRA EL
ASEGURADO O CONDUCTOR AUTORIZADO,
A CONSECUENCIA DE UN HECHO
ACCIDENTAL OCASIONADO CON EL
VEHÍCULO AMPARADO BAJO ESTA PÓLIZA,
CUANDO SE DESATIENDA LAS SEÑALES O
NORMAS REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO,
O CUANDO SE ENCUENTRE BAJO EFECTOS
DE BEBIDAS EMBRIAGANTES, DROGAS
TÓXICAS, HEROICAS O ALUCINÓGENAS.

QUEDA ENTENDIDO QUE ESTE AMPARO NO
EXIME DE RESPONSABILIDAD AL
CONDUCTOR AUTORIZADO A MENOS QUE
SE TRATE DEL ASEGURADO, SUS
PARIENTES, EN LÍNEA DIRECTA O
COLATERAL, HASTA EL SEGUNDO GRADO
DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE
AFINIDAD O PRIMERO CIVIL, O SU CÓNYUGE
NO DIVORCIADO, POR LO CUAL SBS
COLOMBIA PODRÁ SUBROGARSE CONTRA
EL CONDUCTOR HASTA POR LA TOTALIDAD
DE LA INDEMNIZACIÓN PAGADA, EN TODOS
LOS DERECHOS DEL ASEGURADO

De lo anterior, se concluye que los amparos otorgados por la compañía aseguradora que represento, plasmados en la carátula de la Póliza de Responsabilidad Civil aludida, están encaminados a proteger los perjuicios que ocasione el asegurado a terceros, como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual en la que incurra o se le impute en un hecho accidental, tal y como se estipuló en las condiciones generales:

**1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL:**

MUERTE, LESIONES PERSONALES Y/O
DAÑOS EN LOS BIENES MATERIALES
CAUSADOS A TERCEROS NO
TRANSPORTADOS.

Por lo expuesto, a pesar de que en el asunto que nos ocupa no se han configurado los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en caso de evidenciarse los mismos, debo manifestar que no habría cobertura para los hechos que son materia del presente litigio, toda vez que, como se explicó anteriormente, mi representada, a través de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, únicamente ampara los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual en la que incurra el asegurado, que se traduzca en un perjuicio a un tercero diferente a los pasajeros; sin embargo, contrario a ello, tal y como se evidencia en la demanda, las demandantes solicitan la reparación de perjuicios derivados de las lesiones de la presunta pasajera Gladis Londoño Herrera, de manera que, frente a la mentada Póliza no sólo se resalta que no se ha configurado ningún siniestro, sino que además, los hechos que son objeto del litigio configuran una causal de exclusión y por ende, es inexistente la obligación indemnizatoria por parte de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO SE ENCUENTRAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS No. 1000283

Sin que ello signifique que se está reconociendo la existencia de una obligación a cargo de mi procurada, se propone esta excepción, con fundamento en las condiciones particulares y generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, las cuales establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional de mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella, y las cuales dan cuenta que en el caso que nos ocupa se configura la causal de exclusión **4.1 literal S** de las condiciones generales de la póliza, referente a que no existe obligación indemnizatoria los perjuicios causados a pasajeros y/o ocupantes del vehículo asegurado. En efecto, en este asunto, las demandantes pretenden el pago de los perjuicios a ellas causados, con motivo de las lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera cuando se desplazaba como pasajera del vehículo de placa SOZ-882, con ocasión del presunto contrato de transporte que afirman, se celebró entre la lesionada y la Cooperativa Transportadora de Occidente Ltda., de manera que los perjuicios eventualmente derivados de tal relación contractual de transporte están expresamente excluidos de la póliza en mención, de acuerdo con las condiciones generales de la misma.

Como ya ha quedado claro, la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, **siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo** u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc. Al respecto siempre se deberán atender los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como las **exclusiones de amparo**, luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el

asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido de las condiciones de la póliza.

En las condiciones de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo. Tal como lo señala el Art. 1056 del C. Co., el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”.

En el caso en particular, es preciso advertir que en el condicionado general de la póliza se pactó lo siguiente:

CLÁUSULA 4. - EXCLUSIONES

EL PRESENTE CONTRATO NO CUBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE RESPONSABILIDADES POR:

4.1 EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS

S) LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO O CONDUCTOR AUTORIZADO EN EL ACCIDENTE POR EL VEHICULO ASEGURADO A PASAJEROS Y/O OCUPANTES.

En este orden de ideas, descendiendo al caso que nos ocupa, se tiene que las demandantes pretenden el pago de los perjuicios a ellas causados, con motivo de las lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera cuando presuntamente se desplazaba como pasajera del vehículo de placa SOZ-882, con ocasión del contrato de transporte que afirman, se celebró entre la lesionada y la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., de manera que, en efecto, los mismos, de acuerdo con las condiciones generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por mi procurada, se encuentran totalmente excluidos de cobertura.

Es claro que las únicas obligaciones indemnizatorias que pueden recaer sobre mi procurada **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, son las acaecidas en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, y conforme a ello, de acuerdo con las condiciones particulares y generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, en el presente caso, ella no estaría obligada a resarcir los perjuicios alegados por las actoras, toda vez que el entonces tomador de la Póliza Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., NO trasladó el riesgo derivado de la responsabilidad civil contractual, esto es, cualquier evento derivado de la actividad propia del transporte de personas y que signifique un daño o perjuicio para los pasajeros y sólo los pasajeros.

De acuerdo con lo anterior, se colige que, en virtud de la facultad que le otorgó el Art. 1056 del C.

Co., el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume y en ese sentido, para este caso, bajo la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la aseguradora decidió otorgar amparo para los eventos derivados precisamente de la responsabilidad civil extracontractual, siempre y cuando, la misma sea imputada al asegurado, y como la señora Gladis Londoño Herrera presuntamente fungió como pasajera del vehículo asegurado, con ocasión de un contrato de transporte, no habría lugar a indemnización de ningún tipo a favor de las hoy demandantes, por parte de mi representada.

En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

4. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., CON BASE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000098, PORQUE NO SE ACREDITÓ LA REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO NI LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.

Sin perjuicio de las excepciones precedentes las cuales dan cuenta de la inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de mi mandante, se formula esta para dejar en claro que tampoco es viable que se condene a la Aseguradora a pago alguno en relación con la póliza de responsabilidad civil contractual No. 1000098 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020. Lo anterior, por cuanto la demandante no demostró la ocurrencia del riesgo asegurado ni su cuantía en los términos previstos en el Art. 1077 del C. Co. Toda vez que, de los elementos documentales allegados al expediente, en concreto del informe policial de accidente de tránsito incorporado, no se puede concluir que el asegurado haya incurrido en una conducta generadora de responsabilidad civil contractual derivada de la conducción del vehículo de placa SOZ-882.

En efecto, no puede pasarse por alto que las aseguradoras sólo están llamadas a responder al tenor de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de seguro que aquellas expiden, siempre que el evento asegurado efectivamente se materialice. Luego, no puede entenderse comprometido al asegurador por riesgos que no acontecieron. En este orden de ideas, en el caso que nos asiste nada puede reclamarse a mi prohijada, en tanto que no se acreditó que el riesgo que se le trasladó, esto es la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, hubiese acaecido.

Debe advertirse que la responsabilidad de la Compañía de seguros está delimitada estrictamente por el amparo que se otorgó, como lo confirma el examen del texto del contrato de seguro, que enmarca las obligaciones que contrajo, amparo que, como es apenas lógico, deberá hacerse

efectivo una vez el siniestro acaezca. Se debe resaltar que el amparo *responsabilidad civil contractual*, se concertó de la siguiente manera:

CLÁUSULA 2. - RIESGOS CUBIERTOS.

SE CONSIDERA RIESGO CUBIERTO LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CONDICIÓN 1, ENTENDIÉNDOSE:

POR PASAJERO:
A TODA PERSONA TRANSPORTADA QUE SEA PORTADORA DE UN PASAJE O FIGURE EN LA LISTA DE PASAJEROS DEL VEHÍCULO ASEGURADO.

Como ya se ha argumentado de manera reiterada y suficiente, las pretensiones contenidas en el escrito de demanda, carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, ya que no se configuran los elementos necesarios para que la misma sea predicada, sin que se evidencie ningún tipo de proceder culposo que les pueda ser atribuible. En efecto, al ser claro que no hay posibilidad de que exista una condena en contra de los demandados, no habría fundamento entonces para afectar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contractual para Vehículos de Servicio Público No. 1000098, pues no hay prueba alguna que acredite que la señora Gladis Londoño Herrera era pasajera y/o ocupante del vehículo de placa SOZ-882, pues se resalta que la misma no aportó al expediente demandatorio tiquete que acredite la presunta calidad de pasajera o en su defecto no observa listado alguno respecto de los pasajeros que ocuparon el vehículo de servicio público el día 15 de enero del 2020.

En efecto, en este caso tenemos que, la parte demandante no acreditó la ocurrencia del hecho generador del daño respecto al cual pretende se declare la responsabilidad civil de la pasiva de la acción, al no haber adosado al expediente prueba idónea, conducente y útil que permita dar cuenta de la ocurrencia del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero 2020 de la manera como se describe en el libelo genitor. Por el contrario, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que reposa en el plenario se indicó que el volcamiento había obedecido al estado de la vía, consignando lo siguiente: “(...) *Cod. De causa 308 debido a que en la vía se observan unos hundimientos y huecos en la calzada, la causa exacta o probable son materia de investigación (...)*”; es decir por una causa exógena al actuar de la pasiva. Versión que se ratifica con el registro fotográfico aportado con la demanda y que hace parte de la investigación penal.

Así las cosas, se establece que la causa del accidente de tránsito objeto de litigio fue el estado de la vía. Por consiguiente, al no haber prueba fehaciente del supuesto hecho dañoso ni de la culpa del conductor del vehículo de placa SOZ-882 deben negarse totalmente las pretensiones de la demanda. Es decir, no se acreditó la existencia de un nexo causal, consecuentemente, resulta claramente inviable que a este extremo procesal le sea atribuida ninguna responsabilidad.

De otro lado, tampoco se demostró la cuantía de la pérdida, por cuanto que, sin estar justificados los supuestos perjuicios adecuadamente con elementos de convicción idóneos, conducentes y útiles, no se puede concluir tampoco que se haya acreditado la cuantía de la pérdida. Esta falencia demostrativa imposibilita que al asegurador le resulte exigible la afectación de la póliza de seguro, luego que, como se ha venido reiterando incansablemente es obligación del interesado en afectar el aseguramiento, el probar el acaecimiento tanto del siniestro como de su cuantía mediante elementos de convicción que fehaciente den lugar a tener por cierto lo que se asevera, de conformidad con la norma inserta en el Art. 1077 del C. Co.

En conclusión, debe explicarse que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumpla la condición pactada en el contrato para su surgimiento, es ella precisamente la realización del riesgo asegurado o siniestro, es decir, que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad. Por consiguiente, la condición de la que pende el nacimiento de la obligación indemnizatoria en contra de mi prohijada no ha surgido, según lo pactado en el contrato respectivo, por no haberse demostrado la existencia de responsabilidad civil en cabeza del asegurado y por contera no se probó el acaecimiento del riesgo asegurado bajo la correspondiente póliza, además de que como se explicó, tampoco se acreditó la cuantía de la pérdida.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

5. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el convocante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro de daños que sirvió de soporte a la presente acción, como se consagra en el Art. 1088 del C. Co. Norma que establece que jamás el seguro podrá constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento, por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del Asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido

por el asegurado, como lo ordena el Art. 1089 ibídem, también infringida por el convocante. Por lo que la excepción se propone para efectos de que el Despacho tenga en consideración el carácter meramente indemnizatorio del contrato vinculado y en atención del mismo resuelva la relación sustancial de mi mandante en estricta aplicación de las condiciones que rigen el aseguramiento.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la H. Corte Suprema de justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

***“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”**³⁴(Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Es importante mencionar que la materia propia del seguro de daños, como el que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el Art. 1088 del C. Co. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, no son de recibo por cuanto su reconocimiento por parte de los accionados, implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte Demandante recibiendo una indemnización por parte de los demandados que nada tuvieron que ver con los perjuicios invocados en el libelo genitor.

Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado principalmente que: **(i)** No es procedente el reconocimiento de perjuicios morales ni de daño a la vida de relación, por cuanto es claro que no hay responsabilidad alguna de los accionados. Adicionalmente, la solicitud sobrepasa los topes indemnizatorios establecidos por la H. Corte suprema de Justicia, sin que haya prueba de la pérdida de capacidad de la víctima directa. **(ii)** No es procedente el reconocimiento por lucro cesante, como quiera que no existe calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por

³⁴CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

una autoridad competente que, indique el aparente deterioro de la condición de salud de la accionante. Así como tampoco existe prueba en el expediente que acredite o demuestre que el accidente hubiese dejado secuelas. Adicionalmente, en el improbable caso de considerar la existencia de una lesión, deberá tenerse en cuenta que no se probó cómo es que la misma causó una afectación emocional, sumado a que los perjuicios se encuentran tasados de manera exorbitante según los criterios jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia.

En conclusión, es preciso reiterar que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción

6. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000098 Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 1000283

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la póliza de responsabilidad civil contractual No. 1000098 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020 que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, por considerar que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el Art. 1079 del C. Co., debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“(…) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la H. Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)”

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la Póliza de Seguro de responsabilidad Civil contractual vinculada, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera, tal y como se observa:

AMPAROS Y COBERTURAS	
COBERTURA	VALOR ASEGURADO
MUERTE ACCIDENTAL - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$ 60. SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$ 60. SMMLV
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$ 60. SMMLV
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	\$ 60. SMMLV
AMPARO PATRIMONIAL	\$ 0.00
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$ 0.00
ASISTENCIA JURIDICA PROCESO PENAL Y/O CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO	\$ 0.00
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$ 0.00

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguraticio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor se encuentra expresamente definido en la póliza, como se observa en el extracto de arriba, y que asciende a un **monto máximo de 60 SMLMV** por pasajero

conforme a la capacidad del vehículo, que para el momento del accidente corresponden a **\$52.668.180.**

Finalmente, en gracia de discusión, sin que implique ningún tipo de aceptación de responsabilidad y sin perjuicio de lo expuesto en excepciones anteriores, en caso de que el Despacho considere que existe cobertura respecto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283, deberá tener en cuenta los siguientes límites:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	
			%	MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	120. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

De manera que en el hipotético evento de que el Despacho resolviera que existe una condena por responsabilidad civil extracontractual esta no podrá exceder el valor asegurado del amparo de Lesiones o Muerte de un Tercero por **60 SMLMV** y al cual se le debe aplicar el deducible del 10.0% o 1.0 SMLMV, que para el momento del accidente corresponden a **\$47.419.362.**

La póliza relacionada anteriormente RCE, como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada y para el caso que nos ocupa, como se señaló anteriormente corresponde al 10.0% o 1.0 SMLMV.

Ahora bien, es pertinente mencionar que la obligación del asegurador sólo se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a su cargo se limita a la suma asegurada, siendo este el tope máximo. Además de que también son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el Código de Comercio, que en su artículo 1079, establece: “...El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada...”. Claro está, sin perjuicio del respectivo deducible pactado, es decir, de aquella porción que de cualquier pérdida le corresponda asumir al asegurado.

De manera que respetuosamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio de que en el caso bajo análisis no exista realización del riesgo asegurado por ausencia patente de la responsabilidad civil que se deprecia y por ello resulte improcedente la afectación a la póliza. En todo caso, deberá indicarse que dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Despacho en el remoto e improbable evento de una condena en contra del asegurado.

De conformidad con lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

7. EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL PARA VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO No. 1000098

Es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro documentado en la póliza de responsabilidad civil contractual No. 1000098 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** y que delimitan la extensión del riesgo asumido por ella, denominadas causales de exclusión. Las cuales en virtud de lo dispuesto en el Art. 282 del CGP y del artículo 1056 del C. Co, pido declarar probadas una vez se acredite dentro del proceso su configuración.

En efecto, en las condiciones pactadas en el aseguramiento se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita los parámetros del negocio asegurativo. Ahora bien, tal y como lo señala el Art. 1056 del C. Co, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) **ARTÍCULO 1056. <ASUNCIÓN DE RIESGOS>**. *Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)*”. En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decide otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura, las cuales efectivamente se encuentran insertas en el aseguramiento que nos vincula, en la cláusula segunda de su condicionado general.

En consecuencia, de hallarse configurada alguna causal de exclusión contenida en el contrato de seguro, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese sentido, solicito respetuosamente al despacho que, en aplicación de lo previsto en el Art. 282 del

CGP, una vez advertida la configuración de una de las causales de exclusión se le de aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses que atañen a mi prohijada.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

8. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la Aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el estatuto mercantil, que en su Art. 1079 establece que “(...) *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”. Por lo que el Despacho tendrá que resolver la relación sustancial que vincula a mi mandante con este proceso en atención a las condiciones de los aseguramientos por ella expedidos.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc..

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para vincular a mi mandante en esta causa, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende rigurosamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo; por ello, al no haberse demostrado la realización del evento asegurado, inadmisiblemente resultaría que, con fundamento en los hechos que hoy son objeto de litigio, se afecte la póliza vinculada y se le exija a mi mandante pago indemnizatorio alguno; toda vez que, de conformidad con lo ya ampliamente explicado, el contrato se circunscribe únicamente a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones.

En este orden de ideas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

9. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el Art. 282 del CGP³⁵, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante llamamiento en garantía.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juez, declarar probada esta excepción.

CAPÍTULO III

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA EN EXCESO FORMULADO POR LA COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE LTDA. Y EL SEÑOR GUILLERMO ANDRÉS LÓPEZ A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. EN VIRTUD DE LA PÓLIZA SECUNDARIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000100 Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN EXCESO No. 1001044

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL SEGUNDO LLAMAMIENTO

³⁵ **Artículo 282. Resolución sobre excepciones.** En cualquier tipo de proceso, cuando el Juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.

Si el Juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el Juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

EN GARANTÍA

Frente al hecho “1”: Es cierto que actualmente cursa en el presente despacho, proceso de responsabilidad civil contractual, formulado por la señora Gladis Londoño Herrera, quien pretende el reconocimiento de un pago indemnizatorio como consecuencia del presunto accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero de 2020. Pese a ello, es preciso advertir que a mi representada no le consta que las lesiones personas sufridas por la demandante, sean originarias de un presunto accidente de tránsito ocurrido el día 15 de enero del 2020, como quiera que la parte activa no ha probado fehacientemente dichas exposiciones. Pues se reitera que el escrito genitor adolece de los fundamentos facticos y probatorios que permitan a mi representada tener la certeza de la ocurrencia del hecho asegurado y el resultado dañoso, mediante una conducta dolosa o culpa, que permita relacionar a ciencia cierta la responsabilidad del conductor del vehículo de placa SOZ-882, situación esta que no ha sido evidenciada ni en el escrito demandatorio, ni el escrito del llamamiento en garantía.

Frente al hecho “2”: El presente hecho expone varias manifestaciones, ante las cuales procedo a pronunciarme al respecto así:

- No le consta a mi procurada que las lesiones padecidas por la señora Gladis Londoño Herrera, fueran consecuencia del presunto accidente de tránsito del 15 de enero del 2021, como quiera que el escrito de la demanda expone que la fecha presuntamente cierta del accidente de tránsito fue el día **15 de enero del 2020**, por lo cual se encuentra un error en la fijación de la fecha de los hechos objeto del litigio, y encamina a la confusión tanto a mi representada como al juzgador, frente a la veracidad de la ocurrencia de los hechos y las circunstancias que posiblemente rodearon a los mismo.
- Respecto del vehículo de placa SOZ-882 estuvo involucrado en el presunto accidente de tránsito, es una circunstancia que no le consta a mi representada, como quiera que la misma no tuvo participación o injerencia en la ocurrencia de los supuestos hechos. Es preciso exponer nuevamente, que el escrito genitor adolece de elementos probatorios que permita establecer con claridad y de manera fehaciente las verdaderas circunstancias de modo, tiempo y lugar, considerando que no reposa en el dossier Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que permitirá dar cuenta en primer lugar de la ocurrencia del accidente de tránsito señalado por la demandantes, ocurrido el día 15 de enero del 2020, en segundo lugar, poder identificar los vehículo involucrados, la hipótesis del caso, y finalmente analizar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron origen al presunto accidente. Es por expuesto, que solicito se pruebe lo manifestado.

- Finalmente, respeto de la propiedad del vehículo de placa SOZ-882 no le consta a mi representada que el señor Guillermo Andrés Gómez sea el propietario del mismo, pues no se anexa al presente escrito de llamamiento prueba siquiera sumaria que permita dar cuenta a mi procurada la veracidad de lo expuesto. De modo que, solicito su acreditación fáctica en virtud del principio de la carga de la prueba predicable de la parte actora acorde con el Art. 167 del C.G.P.

Frente al hecho “3”: EL presente hecho expone varias manifestaciones, pronunciando al respeto frente a cada una así:

- En primer lugar, se precisa que las pólizas relacionadas en exceso No. 1000100 y No. 1001044 no amparan el riesgo de Predios Laborales y Operacionales. Estos aseguramientos operarían en exceso de las coberturas básicas del amparo de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Pero en ninguna de ellas se incluyó el amparo de PLO referido por el convocante.
- Es cierto que entre la empresa transportadora Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., y mi procurada existe una relación contractual, con base en un Póliza de Responsabilidad Civil Contractual en Exceso No. 1000100 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044. Sin embargo, en este punto es preciso resaltar que la póliza de responsabilidad civil extracontractual no presta cobertura material al presente asunto, como quiera que la misma esta, encaminada a reparar a daños y perjuicios ocasionados con el vehículo asegurado de placa SOZ-882 a TERCEROS NO PASAJERO, resaltando que la señora Gladis Londoño Herrera, formula demanda de responsabilidad civil “contractual” bajo su presunta calidad de “pasajero”. Bajo lo expuesto, se resalta que la póliza de responsabilidad civil extracontractual NO ampara el presunto riesgo que llegare a configurarse en cabeza del conducto del vehículo asegurado. De otro lado, la póliza de responsabilidad civil contractual en exceso tampoco podrá afectarse toda vez que la misma está destinada a cubrir en exceso la póliza de responsabilidad civil extracontractual básica, y considerando lo expuesto anteriormente, la póliza en exceso corre la misma suerte de la básica, y no presta cobertura material al caso que nos ocupa, por cuanto la misma solo ampara los perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS, y en ese orden de ideas la demandante desde el escrito genitor a expuesto que presuntamente la demanda es formulada en su calidad de pasajera del vehículo de placa SOZ-882.
- Frente al pago de los perjuicios que llegaren a ocasionarse dentro del presente litigio, es preciso resaltar que la mera existencia del contrato de seguro, no obliga a mi procurada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., a generar algún tipo de erogación económica en favor de la señora Gladis Londoño Herrera, pues se precisa que el contrato celebrado entre la empresa transportadora y

mi procurada está sometida a las disposiciones legales y contractuales, dentro del cual se establece en primer lugar que el asegurado debe probar la ocurrencia del riesgo asegurado, y junto con ello la cuantía perdida³⁶. Circunstancia misma, que en el presente proceso no se ha establecido.

Frente al hecho “4”: El presente hecho expone varias exposiciones ante las cuales procedo a pronunciarme a cada una de la siguiente manera:

- A mi representada no le consta que el vehículo de placa SOZ-882 estuviere involucrado en el accidente de tránsito del 15 de enero del 2020, como quiera que dentro del expediente no obra prueba siquiera sumaria que permita a mi poderdante establecer de manera fehaciente la veracidad de lo expuesto. En ese orden de ideas, se debe resaltar que el escrito demandantario adolece de argumentos fácticos y probatorio, entre ellos el mínimo de soportes que permiten establecen: (i) en primer lugar la ocurrencia del accidente de tránsito, (ii) las circunstancias de modo, tiempo y lugar del presunto accidente, (iii) cuales son los vehículos presuntamente involucrado, (iv) la hipótesis del accidente de tránsito y (v) finalmente las víctimas que dejó el hecho ocurrido. Se reitera que la demanda inicial adolece del Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento este que, abidas cuenta permitiría a mi representada tener un conocimiento más acorde al verdadero origen del presunto accidente y las consecuencias del mismo.
- Respecto de que el señor Guillermo Andrés López sea el propietario del vehículo de placa SOZ-882 es una circunstancia que no le consta a mi procurada, toda vez que no existe prueba siquiera sumaria que permita establecer la veracidad de la supuesta afirmación. En ese orden de ideas, solicito debe probarse lo expuesto.

Frente a hecho “5”: el presente hecho expone varias manifestaciones, y me pronuncio sobre las mismas así:

- Es cierto, sin embargo, se reitera que, aunque no se desconoce que entre mi representada y la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda. se celebraron los contratos de seguro establecido en la póliza No. 1000100 de responsabilidad civil contractual en exceso y la póliza No. 1001044 de responsabilidad civil extracontractual en exceso, con vigencia desde el día 30 de noviembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020, se advierte que, por un lado, la Póliza de RCE en Exceso No. 1001044, pese a encontrarse vigente al momento del accidente no ofrece cobertura material para los hechos reprobados en el libelo genitor, comoquiera que quien reclama el reconocimiento y pago de la indemnización se desplazaba presuntamente como

³⁶ ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.

pasajera del vehículo asegurado y en el mencionado contrato no se convino amparar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil CONTRACTUAL, pues estos transgreden la naturaleza del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, e incluso, se encuentran excluidos expresamente dentro de sus condiciones particulares y generales. De otro lado, aunque la Póliza de RCC en Exceso No. 100100, se encontraba vigente al momento del accidente, esta no se puede afectar toda vez que no se ha demostrado la responsabilidad civil contractual del asegurado o del conductor del automotor de placa SOZ-882. Además, no puede soslayarse que el referido aseguramiento solamente puede afectarse, eventualmente, respecto de los perjuicios causados a pasajeros del automotor asegurado y no respecto de terceros, por lo que aquellos frente a quienes no se pueda acreditar dicha calidad no podrá hacerse ningún tipo de reconocimiento con base en esta póliza. Se recuerda que la póliza de R.C.C. en Exceso opera únicamente cuando se afecte la póliza principal.

Frente al hecho “6”: Es cierto que las pólizas relacionadas en el presente llamamiento contaban con una vigencia desde el 30 de noviembre del 2019 hasta el 30 de noviembre del 2020, y que estaban vigentes para la ocurrencia del presunto accidente de tránsito del día 15 de enero del 2020. Pese a ello, no le asiste a mi procurado ninguna obligación indemnizatoria, recordando en primer lugar, que la póliza de responsabilidad civil extracontractual no presta cobertura material, por cuanto la misma esta destina a reparar los daños y/o perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS. Y frente a la póliza de responsabilidad civil contractual, le asiste al asegurado la obligación en primer lugar de probar de manera cierta y fehaciente la ocurrencia del riesgo asegurado, y junto con ello el valor perdido, circunstancias mismas que dentro del presente proceso no ha podido ser acreditado.

Frente al hecho “7”: el presente hecho expone varias manifestaciones ante las cuales me pronunciare de la siguiente manera:

- Frente al nexo causal expuesto por el llamante en garantía, se precisa que el mismo hace parte de la configuración de determinar y establecer la presunta responsabilidad pretendida por la demandante, ese orden de ideas, es menester resaltar que la activa del proceso no ha podido acreditar dicho elemento de configuración de la responsabilidad, resaltando en primer lugar, que la demanda adolece de fundamentos facticos y jurídicos que permitan establecer la ocurrencia del accidente de tránsito señalado en el escrito genitor, y dentro del mismo se vio involucrado el vehículo de placa SOZ-882. Seguidamente la demandante no acredita la presunta calidad de pasajera del vehículo antes relacionada, circunstancia esta que aleja aún más la ejecución del nexo causa. Finalmente, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación

- Respecto a la presunta solidaridad en la responsabilidad civil contractual y extracontractual, no es cierto que la misma existe, toda vez que para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad y por cuanto, además, mi mandante no tuvo ninguna injerencia o participación en la consumación del evento reprochado, por lo que, se reitera, no puede deprecarse solidaridad respecto de aquella. Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia³⁷, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero del 2020, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

- Finalmente, mi procurada no está obligada, bajo ninguna circunstancia a generar algún tipo de erogación económica en favor de la demandante y/o reembolso de dinero en favor del llamante en garantía. Pues si bien, no se busca desconocer la existencia de los contratos de seguros que vinculan a la empresa transportadora y mi representada, la mera existencia de los mismo, no da pie a que se genere en cabeza de la compañía de seguros algún tipo de obligación económica, como quiera que la misma no tuvo participación directa o injerencia alguna en la ocurrencia de los presuntos hechos sucedidos el día 15 de enero del 2020. En ese orden de ideas, se recuerda que los vínculos aseguraticios están regulados por las normas comerciales y lo establecido en los contratos y sus clausulados generales

³⁷ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA PRETENSIONES DEL SEGUNDO LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Frente a la pretensión “1”: Sin perjuicio de que el llamamiento ya fue admitido, **ME OPONGO** a la mentada pretensión, por cuanto, a pesar de que se no se desconoce la existencia de un contrato de seguro entre la empresa Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., el señor Guillermo Andrés Gómez y mi representada, debe indicarse que: **(i)** la póliza de seguro de R.C.E. en Exceso No. 1001044 no presta cobertura material, por cuanto esta tiene como objeto reparar los daños y perjuicios ocasionados a TERCEROS NO PASAJEROS, situación está que es totalmente ajena al caso que nos convoca, toda vez que la señora Gladis Londoño Herrera, formula la demanda de responsabilidad civil, presuntamente bajo la calidad de pasajera de vehículo de placa SOZ-882. **(ii)** la póliza de seguro de R.C.C. en Exceso No. 1000100, tampoco puede resultar afectada en este proceso, pues se debe recordar que el amparo otorgado en aquella únicamente tiene cabida previa **demonstración** de la responsabilidad civil contractual en cabeza del asegurado, es decir, previa demostración de la ocurrencia del riesgo asegurado, lo cual no ha ocurrido por cuanto el escrito genitor adolece de los argumentos facticos y probatorios que den cuenta de la ocurrencia del hecho asegurado.

Se resalta que no hay documento alguno, emitido por la autoridad competente que de cuenta de la ocurrencia de los hechos objeto del presente litigio, pues el escrito demandatorio adolece del IPAT y/o de un informe investigativo de los hechos expuestos por la señora Gladis Londoño en su calidad de demandante. Se precisa que la carga de la prueba se encuentra en cabeza de quien las alega, y bajo ese entendido es la parte actora quien debe acreditar de manera fehaciente los elementos que dan cuenta de la responsabilidad que se pretende endilgar. Se resalta que no hay prueba alguna de la ocurrencia del accidente de tránsito ocurrido presuntamente el día 15 de enero del 2020 y que como consecuencia del mismo se produjo unos daños a la hoy demandante, probando de manera eficiente la relación entre una conducta dolosa y/o culposa por parte del conductor del vehículo de placa SOZ-882 y los presuntos perjuicios que alega haber padecido la señora Gladis Londoño.

Frente a la pretensión “2”: se refiere esta pretensión a una actuación procesal que ya se encuentra agotada en esta etapa del proceso.

Frente a la pretensión “3”: se refiere esta pretensión a una actuación procesal que ya se encuentra agotada en esta etapa del proceso.

Frente a la pretensión “4”: se refiere esta pretensión a una actuación procesal que ya se encuentra agotada en esta etapa del proceso.

III. EXCEPCIONES FRENTE AL PRIMER LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. IMPOSIBILIDAD DE ATRIBUIR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A

Se formula esta excepción en razón a que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia³⁸, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte³⁹ igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

³⁸ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

³⁹ Ibídem.

Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización. Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (...)” (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguraticia por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero de 2020, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite como quiera que su relación con el vehículo de placa SOZ-882 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

2. AUSENCIA DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO No. 1001044 EXPEDIDA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. POR CUANTO NO AMPARA PERJUICIOS DERIVADOS DE PASAJEROS

Se formula esta excepción, debido a que en el hipotético y eventual caso de que prosperaran las pretensiones de los actores, no habría cobertura para los hechos que son materia del presente litigio, toda vez que, mi representada, respecto a la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044, no convino amparar los perjuicios derivados de la responsabilidad civil CONTRACTUAL, esto es, los que se ocasionen en razón del incumplimiento del contrato de transporte suscrito entre los pasajeros y la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., pues estos, lógicamente, transgreden la naturaleza del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, e incluso, se encuentran excluidos expresamente dentro de sus condiciones particulares y generales.

Es importante señalar en primer lugar que, en el espectro de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la parte aseguradora puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que está expuesto el interés asegurado, con fundamento en la facultad que se consagra en el Art. 1056 del C. Co. Es de esta forma como al suscribir el contrato asegurativo respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo acuerdo. De manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes. La H. Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...)”⁴⁰

Entre las condiciones que se pueden pactar por los contratantes, es posible encontrar la determinación de límites temporales, territoriales, sobre la cuantía y de la ocurrencia de circunstancias específicas. En esa categoría, la relación sustancial que rige las obligaciones de mi mandante, necesariamente se sujetará a las diversas condiciones de los contratos de seguro, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo. Luego, son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de las obligaciones de mi prohijsada, al contenido de las condiciones de la correspondiente póliza.

Consecuentemente, la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende estrictamente de las diversas estipulaciones contractuales, frente a los hechos que se prueben en

⁴⁰ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC4574-2015. Radicación No. 11001-31-03-023-2007-00600-0.

el proceso, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según lo pactado y no a cualquier evento, ni a cualquier otro riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo. En materia de seguros, el asegurador, según indica el Art. 1058 del C. Co.: “(...) *podrá, a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado o la cosa asegurados (...)*”. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que amparo opera o es efectivo, las causales de exclusión o en general las de exoneración, además de las de origen legal, etc. Por tanto, son esos los parámetros a los que tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la póliza vinculada.

Para aclarar el argumento anterior, se precisa indicar que **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, expidió la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044 con ocasión del contrato de seguro suscrito entre la Cooperativa de Transportadores de Occidente Ltda., el señor Guillermo Andrés Gómez y aquella como Compañía Aseguradora, vigente desde el 30 de noviembre del 2019 al 30 de noviembre de 2020, no obstante, debe indicarse que dicho contrato de seguro, únicamente tiene el fin de cubrir los daños o perjuicios que ocasione el asegurado, que en este caso es el propietario del mencionado vehículo o la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., **derivados de la responsabilidad extracontractual que le sea imputada frente a terceros NO PASAJEROS.**

Entonces, a pesar de la existencia de un contrato de seguro tomado por la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., materializado en la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044, de acuerdo con la carátula de la misma, los hechos y pretensiones de la presente demanda, no configuran una obligación en cabeza de mi representada **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, por cuanto dicha póliza (i) únicamente tiene el fin de cubrir los daños o perjuicios que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad extracontractual que ocasione a terceros NO PASAJEROS y (ii) se encuentran expresamente excluidos los perjuicios originados directa o indirectamente de lesiones o muerte de ocupantes del vehículo asegurado, tal y como se procederá a exponer de manera detallada en la excepción siguiente.

Al respecto, se debe resaltar que los amparos otorgados por mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., dentro de la mentada Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual fueron los siguientes:

2.1.1 AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL

SBS COLOMBIA CON SUJECCIÓN A LAS COBERTURAS CONTRATADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, Y A LAS CONDICIONES Y DEDUCIBLES ACORDADOS INDEMNIZARA LOS PERJUICIOS EN QUE DE ACUERDO CON LA LEY Y POR RAZÓN DE LA

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL INCURRA EL ASEGURADO O CONDUCTOR AUTORIZADO.

A CONSECUENCIA DE UN HECHO ACCIDENTAL OCASIONADO CON EL VEHÍCULO AMPARADO BAJO ESTA PÓLIZA, CUANDO SE DESATIENDA LAS SEÑALES O NORMAS REGLAMENTARIAS DE TRÁNSITO, O CUANDO SE ENCUENTRE BAJO EFECTOS DE BEBIDAS EMBRIAGANTES, DROGAS TÓXICAS, HEROICAS O ALUCINÓGENAS.

QUEDA ENTENDIDO QUE ESTE AMPARO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL CONDUCTOR AUTORIZADO A MENOS QUE SE TRATE DEL ASEGURADO, SUS PARIENTES, EN LÍNEA DIRECTA O COLATERAL, HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD O PRIMERO CIVIL, O SU CÓNYUGE NO DIVORCIADO, POR LO CUAL SBS COLOMBIA PODRÁ SUBROGARSE CONTRA EL CONDUCTOR HASTA POR LA TOTALIDAD DE LA INDEMNIZACIÓN PAGADA, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO

De lo anterior, se concluye que los amparos otorgados por la compañía aseguradora que represento, plasmados en la carátula de la Póliza de Responsabilidad Civil aludida, están encaminados a proteger los perjuicios que ocasione el asegurado a terceros, como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual en la que incurra o se le impute en un hecho accidental, tal y como se estipuló en las condiciones generales:

1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

MUERTE, LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS EN LOS BIENES MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS NO TRANSPORTADOS.

Por lo expuesto, a pesar de que en el asunto que nos ocupa no se han configurado los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, en caso de evidenciarse los mismos, debo manifestar que no habría cobertura para los hechos que son materia del presente litigio, toda vez que, como se explicó anteriormente, mi representada, a través de la Póliza de Responsabilidad Civil

Extracontractual en Exceso No. 1001044, únicamente ampara los perjuicios derivados de la responsabilidad civil extracontractual en la que incurra el asegurado, que se traduzca en un perjuicio a un tercero diferente a los pasajeros; sin embargo, contrario a ello, tal y como se evidencia en la demanda, las demandantes solicitan la reparación de perjuicios derivados de las lesiones de la presunta pasajera Gladis Londoño Herrera, de manera que, frente a la mentada Póliza no sólo se resalta que no se ha configurado ningún siniestro, sino que además, los hechos que son objeto del litigio configuran una causal de exclusión y por ende, es inexistente la obligación indemnizatoria por parte de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

3. LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y LOS PERJUICIOS CAUSADO A LOS OCUPANTES DEL VEHÍCULO ASEGURADO SE ENCUENTRAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS DEL ÁMBITO DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN EXCESO No. 1001044

Sin que ello signifique que se está reconociendo la existencia de una obligación a cargo de mi procurada, se propone esta excepción, con fundamento en las condiciones particulares y generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044, las cuales establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional de mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella, y las cuales dan cuenta que en el caso que nos ocupa se configura la causal de exclusión **4.1 literal S** de las condiciones generales de la póliza, referente a que no existe obligación indemnizatoria los perjuicios causados a pasajeros y/o ocupantes del vehículo asegurado. En efecto, en este asunto, las demandantes pretenden el pago de los perjuicios a ellas causados, con motivo de las lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera cuando se desplazaba como pasajera del vehículo de placa SOZ-882, con ocasión del presunto contrato de transporte que afirman, se celebró entre la lesionada y la Cooperativa Transportadora de Occidente Ltda., de manera que los perjuicios eventualmente derivados de tal relación contractual de transporte están expresamente excluidos de la póliza en mención, de acuerdo con las condiciones generales de la misma.

Como ya ha quedado claro, la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, **siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo** u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados

para cada riesgo tomado, etc. Al respecto siempre se deberán atender los riesgos asumidos por la convocada, los valores asegurados para cada uno de los amparos, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como las **exclusiones de amparo**, luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para el llamamiento en garantía, al contenido de las condiciones de la póliza.

En las condiciones de Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.1001044, se establecen los parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo mi representada, y delimitan la extensión del riesgo asumido por ella. En efecto, en ellas se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo. Tal como lo señala el Art. 1056 del C. Co., el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”.

En el caso en particular, es preciso advertir que en el condicionado general de la póliza se pactó lo siguiente:

CLÁUSULA 4. - EXCLUSIONES

EL PRESENTE CONTRATO NO CUBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE RESPONSABILIDADES POR:

4.1 EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS

S) LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO O CONDUCTOR AUTORIZADO EN EL ACCIDENTE POR EL VEHICULO ASEGURADO A PASAJEROS Y/O OCUPANTES.

En este orden de ideas, descendiendo al caso que nos ocupa, se tiene que las demandantes pretenden el pago de los perjuicios a ellas causados, con motivo de las lesiones sufridas por la señora Gladis Londoño Herrera cuando presuntamente se desplazaba como pasajera del vehículo de placa SOZ-882, con ocasión del contrato de transporte que afirman, se celebró entre la lesionada y la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda., de manera que, en efecto, los mismos, de acuerdo con las condiciones generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual expedida por mi procurada, se encuentran totalmente excluidos de cobertura.

Es claro que las únicas obligaciones indemnizatorias que pueden recaer sobre mi procurada **SBS**

SEGUROS COLOMBIA S.A., son las acaecidas en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual, y conforme a ello, de acuerdo con las condiciones particulares y generales de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044, en el presente caso, ella no estaría obligada a resarcir los perjuicios alegados por las actoras, toda vez que el entonces tomador de la Póliza Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda y el señor Guillermo Andrés Gómez como asegurado, NO trasladó el riesgo derivado de la responsabilidad civil contractual, esto es, cualquier evento derivado de la actividad propia del transporte de personas y que signifique un daño o perjuicio para los pasajeros y sólo los pasajeros.

De acuerdo con lo anterior, se colige que, en virtud de la facultad que le otorgó el Art. 1056 del c. Co., el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume y en ese sentido, para este caso, bajo la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la aseguradora decidió otorgar amparo para los eventos derivados precisamente de la responsabilidad civil extracontractual, siempre y cuando, la misma sea imputada al asegurado, y como la señora Gladis Londoño Herrera presuntamente fungió como pasajera del vehículo asegurado, con ocasión de un contrato de transporte, no habría lugar a indemnización de ningún tipo a favor de las hoy demandantes, por parte de mi representada.

En virtud de lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

4. INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., CON BASE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN EXCESO No. 1000100, PORQUE NO SE ACREDITÓ LA REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO NI LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.

Sin perjuicio de las excepciones precedentes las cuales dan cuenta de la inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de mi mandante, se formula esta para dejar en claro que tampoco es viable que se condene a la Aseguradora a pago alguno en relación con la póliza de responsabilidad civil contractual en exceso No. 1000100 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020. Lo anterior, por cuanto la demandante no demostró la ocurrencia del riesgo asegurado ni su cuantía en los términos previstos en el Art. 1077 del C. Co. Toda vez que, de los elementos documentales allegados al expediente, en concreto del informe policial de accidente de tránsito incorporado, no se puede concluir que el asegurado haya incurrido en una conducta generadora de responsabilidad civil contractual derivada de la conducción del vehículo de placa SOZ-882.

En efecto, no puede pasarse por alto que las aseguradoras sólo están llamadas a responder al tenor de las obligaciones contractuales pactadas en los contratos de seguro que aquellas expiden, siempre que el evento asegurado efectivamente se materialice. Luego, no puede entenderse comprometido al asegurador por riesgos que no acontecieron. En este orden de ideas, en el caso que nos asiste nada puede reclamarse a mi prohijada, en tanto que no se acreditó que el riesgo que se le trasladó, esto es la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, hubiese acaecido.

Debe advertirse que la responsabilidad de la Compañía de seguros está delimitada estrictamente por el amparo que se otorgó, como lo confirma el examen del texto del contrato de seguro, que enmarca las obligaciones que contrajo, amparo que, como es apenas lógico, deberá hacerse efectivo una vez el siniestro acaezca. Se debe resaltar que el amparo *responsabilidad civil contractual*, se concertó de la siguiente manera:

CLÁUSULA 2. - RIESGOS CUBIERTOS.

SE CONSIDERA RIESGO CUBIERTO LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN LA CONDICIÓN 1, ENTENDIÉNDOSE:

POR PASAJERO:
A TODA PERSONA TRANSPORTADA QUE SEA PORTADORA DE UN PASAJE O FIGURE EN LA LISTA DE PASAJEROS DEL VEHÍCULO ASEGURADO.

Como ya se ha argumentado de manera reiterada y suficiente, las pretensiones contenidas en el escrito de demanda, carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de los demandados, ya que no se configuran los elementos necesarios para que la misma sea predicada, sin que se evidencie ningún tipo de proceder culposo que les pueda ser atribuible. En efecto, al ser claro que no hay posibilidad de que exista una condena en contra de los demandados, no habría fundamento entonces para afectar Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Contractual en Exceso para Vehículos de Servicio Público No. 1000100, pues no hay prueba alguna que acredite que la señora Gladis Londoño Herrera era pasajera y/o ocupante del vehículo de placa SOZ-882, pues se resalta que la misma no aportó al expediente demandatorio ticket que acredite la presunta calidad de pasajera o en su defecto no observa listado alguno respecto de los pasajeros que ocuparon el vehículo de servicio público el día 15 de enero del 2020.

En efecto, en este caso tenemos que, la parte demandante no acreditó la ocurrencia del hecho generador del daño respecto al cual pretende se declare la responsabilidad civil de la pasiva de la acción, al no haber adosado al expediente prueba idónea, conducente y útil que permita dar cuenta de la ocurrencia del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 15 de enero 2020 de la manera como se describe en el líbello genitor. Por el contrario, en el Informe Policial de Accidente de Tránsito que reposa en el plenario se indicó que el volcamiento había obedecido al estado de la vía, consignando lo siguiente: *“(...) Cod. De causa 308 debido a que en la vía se observan unos hundimientos y huecos en la calzada, la causa exacta o probable son materia de investigación (...)”*; es decir por una causa exógena al actuar de la pasiva. Versión que se ratifica con el registro fotográfico aportado con la demanda y que hace parte de la investigación penal.

Así las cosas, se establece que la causa del accidente de tránsito objeto de litigio fue el estado de la vía. Por consiguiente, al no haber prueba fehaciente del supuesto hecho dañoso ni de la culpa del conductor del vehículo de placa SOZ-882 deben negarse totalmente las pretensiones de la demanda. Es decir, no se acreditó la existencia de un nexo causal, consecuentemente, resulta claramente inviable que a este extremo procesal le sea atribuida ninguna responsabilidad.

De otro lado, tampoco se demostró la cuantía de la pérdida, por cuanto que, sin estar justificados los supuestos perjuicios adecuadamente con elementos de convicción idóneos, conducentes y útiles, no se puede concluir tampoco que se haya acreditado la cuantía de la pérdida. Esta falencia demostrativa imposibilita que al asegurador le resulte exigible la afectación de la póliza de seguro, luego que, como se ha venido reiterando incansablemente es obligación del interesado en afectar el aseguramiento, el probar el acaecimiento tanto del siniestro como de su cuantía mediante elementos de convicción que fehaciente den lugar a tener por cierto lo que se asevera, de conformidad con la norma inserta en el Art. 1077 del C. Co.

En conclusión, debe explicarse que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumpla la condición pactada en el contrato para su surgimiento, es ella precisamente la realización del riesgo asegurado o siniestro, es decir, que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad. Por consiguiente, la condición de la que pende el nacimiento de la obligación indemnizatoria en contra de mi prohijada no ha surgido, según lo pactado en el contrato respectivo, por no haberse demostrado la existencia de responsabilidad civil en cabeza del asegurado y por contera no se probó el acaecimiento del riesgo asegurado bajo la correspondiente póliza, además de que como se explicó, tampoco se acreditó la cuantía de la pérdida. Sin perjuicio de lo expuesto, se precisa que la mencionada póliza opera en exceso de la principal, y esta no podría ser afectada de manera directa.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

5. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el convocante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro de daños que sirvió de soporte a la presente acción, como se consagra en el Art. 1088 del C. Co. Norma que establece que jamás el seguro podrá constituir para el asegurado fuente de enriquecimiento, por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del Asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el Art. 1089 ibídem, también infringida por el convocante. Por lo que la excepción se propone para efectos de que el Despacho tenga en consideración el carácter meramente indemnizatorio del contrato vinculado y en atención del mismo resuelva la relación sustancial de mi mandante en estricta aplicación de las condiciones que rigen el aseguramiento.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la H. Corte Suprema de justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”*⁴¹(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro de daños, como el que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el Art. 1088 del C. Co. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

Así las cosas, no debe perderse de vista que las solicitudes deprecadas en el escrito de demanda por concepto de perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, no son de recibo por cuanto su

⁴¹CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065.

reconocimiento por parte de los accionados, implicaría correlativamente una transgresión del principio indemnizatorio esencial del contrato de seguro. Lo anterior, puesto que se enriquecería la parte Demandante recibiendo una indemnización por parte de los demandados que nada tuvieron que ver con los perjuicios invocados en el libelo genitor.

Adicionalmente, no habría lugar al reconocimiento de estos conceptos, dado principalmente que: **(i)** No es procedente el reconocimiento de perjuicios morales ni de daño a la vida de relación, por cuanto es claro que no hay responsabilidad alguna de los accionados. Adicionalmente, la solicitud sobrepasa los topes indemnizatorios establecidos por la H. Corte suprema de Justicia, sin que haya prueba de la pérdida de capacidad de la víctima directa. **(ii)** No es procedente el reconocimiento por lucro cesante, como quiera que no existe calificación de pérdida de capacidad laboral emitida por una autoridad competente que, indique el aparente deterioro de la condición de salud de la accionante. Así como tampoco existe prueba en el expediente que acredite o demuestre que el accidente hubiese dejado secuelas. Adicionalmente, en el improbable caso de considerar la existencia de una lesión, deberá tenerse en cuenta que no se probó cómo es que la misma causó una afectación emocional, sumado a que los perjuicios se encuentran tasados de manera exorbitante según los criterios jurisprudenciales de la H. Corte Suprema de Justicia.

En conclusión, es preciso reiterar que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo atiene a un carácter meramente indemnizatorio. Por todo lo anterior y teniendo en cuenta la indebida solicitud y tasación de perjuicios, se deberá declarar probada la presente excepción y así evitar la contravención del carácter indemnizatorio del contrato de seguro y un correlativo un enriquecimiento sin justa causa en cabeza de la actora.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción

6. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000100 Y LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1001044 LAS CUALES OPERAN EN EXCESO DE LAS COBERTURAS BÁSICAS

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la póliza de responsabilidad civil contractual en Exceso No. 1000100 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020 que hoy nos ocupa sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, por considerar que sí se realizó el riesgo asegurado y que en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi

poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el Art. 1079 del C. Co., debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“(...) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...)”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la H. Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)”

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la Póliza de Seguro de responsabilidad Civil contractual en exceso vinculada, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera, tal y como se observa:

AMPAROS Y COBERTURAS		
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	
MUERTE ACCIDENTAL - RCC EXCESO	\$	100. SMLMV
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE - RCC EXCESO	\$	100. SMLMV
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL - RCC EXCESO	\$	100. SMLMV
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS - RCC EXCESO	\$	100. SMLMV
AMPARO PATRIMONIAL	\$	0.00
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	0.00
ASISTENCIA JURIDICA PROCESO PENAL Y/O CONTRAVENCIONAL DE TRANSITO	\$	0.00

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato aseguraticio, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor se encuentra expresamente definido en la póliza, como se observa en el extracto de arriba, y que asciende a un **monto máximo de 100 SMLMV** por pasajero conforme a la capacidad del vehículo, que para el momento del accidente corresponden a **\$87.780.200.**

Finalmente, en gracia de discusión, sin que implique ningún tipo de aceptación de responsabilidad y sin perjuicio de lo expuesto en excepciones anteriores, en caso de que el Despacho considere que existe cobertura respecto de la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044, deberá tener en cuenta los siguientes límites:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	
			%	MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN EXCESO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	100. SMLMV	--	--
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	100. SMLMV	--	--
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	200. SMLMV	--	--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

De manera que en el hipotético evento de que el Despacho resolviera que existe una condena por responsabilidad civil extracontractual esta no podrá exceder el valor asegurado del amparo de Lesiones o Muerte de un Tercero por 100 SMLMV, que para el momento del accidente corresponden a **\$87.780.200** el valor condenado no puede ser superior al pactado en la póliza, recordando que esta **ópera únicamente cuando el amparo otorgado en la póliza de responsabilidad civil extracontractual básica se encuentre agotado**, de lo contrario no podría tenerse de presente la relacionada póliza en exceso.

Es preciso resaltar que la póliza de responsabilidad civil **EN EXCESO, solo podrá afectarse cuando se agote la cobertura de la póliza de responsabilidad civil extracontractual básica.**

De manera que respetuosamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio de que en el caso bajo análisis no exista realización del riesgo asegurado por ausencia patente de la responsabilidad civil que se deprecia y por ello resulte improcedente la afectación a la póliza. En todo caso, deberá indicarse que dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Despacho en el remoto e improbable evento de una condena en contra del asegurado.

De conformidad con lo anterior, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

7. EXCLUSIONES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL EN EXCESO No. 1000100

Es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro documentado en la póliza de responsabilidad civil contractual en Exceso No. 1000100 con vigencia desde el día 30 de noviembre de 2019 hasta el 30 de noviembre de 2020, se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional que contrajo **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** y que delimitan la extensión del riesgo asumido por ella, denominadas causales de exclusión. Las cuales en virtud de lo dispuesto en el Art. 282 del CGP y del artículo 1056 del C. Co, pido declarar probadas una vez se acredite dentro del proceso su configuración.

En efecto, en las condiciones pactadas en el aseguramiento se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato y definen de manera explícita los parámetros del negocio asegurativo. Ahora bien, tal y como lo señala el Art. 1056 del C. Co, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume: “(...) **ARTÍCULO 1056. <ASUNCIÓN DE RIESGOS>**. *Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...).*”. En virtud de la facultad referenciada en el artículo previamente citado, el asegurador decide otorgar determinados amparos, supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, incorporando en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a las prestaciones señaladas en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura, las cuales efectivamente se encuentran insertas en el aseguramiento que nos vincula, en la cláusula segunda de su condicionado general.

En consecuencia, de hallarse configurada alguna causal de exclusión contenida en el contrato de seguro, no habría lugar a indemnización de ningún tipo por parte de mi representada, y en ese

sentido, solicito respetuosamente al despacho que, en aplicación de lo previsto en el Art. 282 del CGP, una vez advertida la configuración de una de las causales de exclusión se le de aplicación, con miras a proteger los derechos e intereses que atañen a mi prohijada.

Solicito al Señor Juez, declarar probada esta excepción.

8. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la Aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el estatuto mercantil, que en su Art. 1079 establece que “(...) *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”. Por lo que el Despacho tendrá que resolver la relación sustancial que vincula a mi mandante con este proceso en atención a las condiciones de los aseguramientos por ella expedidos.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc..

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para vincular a mi mandante en esta causa, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende rigurosamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo; por ello, al no haberse demostrado la realización del evento asegurado, inadmisiblemente resultaría que, con fundamento en los hechos que hoy son objeto de litigio, se afecte la póliza vinculada y se le exija a mi mandante pago indemnizatorio alguno; toda vez que, de conformidad con lo ya ampliamente explicado, el contrato se circunscribe únicamente a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones.

En este orden de ideas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

9. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Conforme a lo dispuesto en el Art. 282 del CGP⁴², solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o al contrato de seguro utilizado para convocar a mi representada al presente litigio mediante llamamiento en garantía.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juez, declarar probada esta excepción.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS POR LA PARTE ACCIONANTE

a. Ratificación de documentos provenientes de terceros:

El Art. 262 del C.G.P., preceptúa que: “(...) *Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (...)*”.

⁴² **Artículo 282. Resolución sobre excepciones.** En cualquier tipo de proceso, cuando el Juez halle probados los hechos que constituyen una excepción deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda.

Cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada.

Si el Juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepción resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia.

Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el Juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso contrario se limitará a declarar si es o no fundada la excepción.

Por supuesto, esta ratificación concebida en la legislación procesal actual, le traslada a quien quiere valerse de documentos provenientes de terceros, el deber de obtener que lo ratifiquen sus respectivos autores, cuando así lo requiere la parte contraria frente a la cual se aportan tales documentos. Resulta lógico que sea quien aporta los documentos provenientes de terceros, quien tenga en sus hombros la carga de hacerlos ratificar de quien los obtuvo o creó, si es que quiere emplearlos como medio de convicción.

En tal virtud, pido que no se les reconozca valor a los siguientes documentos mientras los demandantes no satisfagan el deber de lograr que sean ratificados, en la forma en que lo pido de manera expresa aquí: Dictamen para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, emitido por el Médico Laboral Juan Manual Hincapie.

b. Oposición frente a la solicitud de pruebas periciales:

Desde ya, me opongo de manera rotunda a que se decrete como prueba pericial, la realización de la verificación del dictamen para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional de la señora Gladis Londoño Herrera, comoquiera que dicha petición contraría abiertamente las normas procesales previstas para ese propósito. En efecto, el Art. 227 del C.G.P. prevé lo siguiente:

“(...) Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a diez (10) días. En este evento el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba.

El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado (...)”

Conviene recordar al despacho que sobre las cargas procesales la H. Corte Constitucional ha referido lo siguiente:

“(...) las cargas procesales se caracterizan porque el sujeto a quien se las impone la ley conserva la facultad de cumplirlas o no, sin que el Juez o persona alguna pueda compelerlo coercitivamente a ello, todo lo contrario de lo que sucede con las obligaciones; de no, tal omisión le puede acarrear consecuencias desfavorables. Así, por ejemplo, probar los supuestos de hecho para no recibir una sentencia adversa (...)”

Surge palmario que sustentar los hechos de la demanda y las pretensiones expresadas en la misma, corresponde a una carga atribuida exclusivamente al demandante, en la que el despacho no debe

intervenir al decretar y ordenar una prueba indebidamente solicitada, librando de la carga al extremo actor. Especialmente sobre la carga de la prueba, la misma Corporación ha manifestado lo siguiente:

“(…) Por regla general, la carga de la prueba le corresponde a las partes, quienes deben acreditar los hechos que invocan a su favor y que sirven de base para sus pretensiones. Este deber, conocido bajo el aforismo “onus probandi”, exige la realización de ciertas actuaciones procesales en interés propio, como la demostración de la ocurrencia de un hecho o el suministro de los medios de pruebas que respalden suficientemente la hipótesis jurídica defendida. De ahí que, de no realizarse tales actuaciones, según la jurisprudencia reiterada de esta Corporación, el resultado evidente sea la denegación de las pretensiones, la preclusión de las oportunidades y la pérdida de los derechos.

Esta regla ha estado prevista en el ordenamiento civil, al establecerse que “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen” (art. 177 del Código de Procedimiento Civil y art. 167 del Código General del Proceso). Por lo que, así visto, se puede concluir que, el incumplimiento de la carga de la prueba no resulta admisible por la normatividad civil (….)”

En ese entendido, correspondía a la parte actora aportar dicha prueba junto con el escrito demandatorio, dado que esa corresponde a su oportunidad procesal para pedir pruebas, sin pretender injustificadamente que el despacho premie su inactividad y supla las deficiencias y falencias probatorias del extremo actor. Cabe resaltar que dentro del expediente no obra ninguna prueba que acredite un mínimo de diligencia de la parte actora por obtener, por sus propios medios, dicho dictamen.

SOLICITUD Y APOORTE DE PRUEBAS POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes:

a. Documentales:

Solicito se tengan como tales las siguientes, que anexo al presente escrito y/o constan ya en el expediente:

- Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000098 y su clausulado general.
- Póliza de Responsabilidad Civil Contractual en Exceso No. 1000100 y su clausulado general.
- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000283 y su clausulado general.

- Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual en Exceso No. 1001044 y su clausulado general.

b. Interrogatorio de parte:

Respetuosamente solicito ordenar y hacer comparecer a su Despacho a la demandante GLADIS LONDOÑO HERRERA, para que en audiencia pública absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito le formularé sobre los hechos en los que se sustenta la demanda.

Adicionalmente, solicito respetuosamente se me permita efectuar el interrogatorio de parte a los señores **JORGE HUMBERTO MAYORGA** como Representante Legal de la Cooperativa Transportadores de Occidente Ltda. Y al señor **GUILLEMOR ANDRÉS LÓPEZ**.

c. Declaración de parte:

Conforme a lo establecido en el Art. 200 del C.G.P., solicito se haga comparecer al representante legal de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, para efectos de que agotar la declaración de parte de aquel por medio de cuestionario verbal o escrito que se presentará en la audiencia que para tal fin señale el Despacho, a fin de que declaren sobre los hechos de la demanda y las excepciones formuladas, así como todos los demás puntos que resulten relevantes en relación con los medios exceptivos presentados con la contestación.

d. Testimonial:

Solicito respetuosamente se decrete el testimonio de la Dra. **ISABELLA CARO OROZCO**, identificada con cédula de ciudadanía 114.470.541, quien tiene domicilio en la ciudad de Cali y puede ser citada en la Carrera 85 No. 15-88 piso 2 de la ciudad de Cali, y dirección de notificaciones Isabella.car023@outlook.com. Asesora Externa de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos en que se fundamentan las excepciones propuestas, y en especial para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la póliza expedida por mi prohijada y vinculada en este proceso, las condiciones particulares y generales de la póliza de seguro expedida por mi mandante, y sobre la disponibilidad de la cobertura, o de los pagos que se hayan realizado con cargo a la misma.

e. Dictamen pericial

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 226 y 227 del C.G.P., anuncio al Despacho que para acreditar la forma en la que habrían ocurrido los hechos demandados y controvertir las afirmaciones de la demanda, anuncio que me valdré de un Dictamen pericial emitido por ingeniero especialista

en física o en área afín a la reconstrucción de accidentes de tránsito, en el que se efectúe la reconstrucción del accidente de tránsito reprochado, se analicen las pruebas allegadas al expediente en relación con la génesis, desarrollo y consecuencias del accidente de tránsito del 15 de enero del 2020.

Las pruebas periciales de contradicción se anuncian porque no es posible presentarlas en este momento, ya que para su producción se requiere previamente que el perito realice un estudio juicioso de las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos demandados, se revise la copiosa documentación que fue aportada con la demanda, y emita sus respectivas conclusiones.

Para ello, se solicita al Despacho se conceda un término mínimo de 30 días hábiles, posteriores a la fecha de admisión de la prueba, para que el respectivo perito pueda adelantar todas las actividades y gestiones pertinentes, e incorporar el dictamen.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juzgador proceder de conformidad

V. ANEXOS

1. Poder general otorgado al suscrito mediante escritura pública, el cual ya reposa en el expediente por haber sido incorporado con la contestación a la demanda.
2. Copia del certificado de existencia y representación de G HERRERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S., el cual ya reposa en el expediente por haber sido incorporado con la contestación a la demanda.
3. Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** el cual ya reposa en el expediente por haber sido incorporado con la contestación a la demanda.
4. Los demás relacionados en el acápite de pruebas.

VI. NOTIFICACIONES

La parte actora recibirá notificaciones en el lugar indicado en el escrito de la demanda. La parte que efectuó el llamamiento en garantía recibirá notificaciones en el lugar indicado en el escrito del llamamiento en garantía.

Mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., en la calle 36 No. 6 A – 65, oficina 2108 de la ciudad de Cali. Email: notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co

Al suscrito, en la Avenida 6 A Bis No. 35N-100, Oficina 212 de la ciudad de Cali; correo electrónico:
notificaciones@gha.com.co

Cordialmente,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C. S. de la J.